

Evatt preguntó qué sucederá el año próximo. Si dejamos de insistir en los derechos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no tendremos el próximo año ni siquiera la posibilidad moral de protestar, como lo hicimos el año pasado, contra la intención de incorporar el África Sudoccidental en la Unión Sudafricana.

Cuando la delegación de Dinamarca vió que la mayoría de la Cuarta Comisión favorecía que se fijara un plazo, cuando vió que la mayoría de la Comisión insistía en los derechos de las Naciones Unidas, presentó lo que llama su "cortés" enmienda para suavizar el tono general de la resolución.

Si no solucionamos la situación jurídica del África Sudoccidental tendremos que hacer frente a esta situación: este Territorio será incorporado a la Unión Sudafricana después de la segunda guerra mundial en vez de haberlo sido después de la primera guerra mundial. Lo que fué imposible después de la primera guerra mundial debido al sistema de mandatos y al control ejercido por la Sociedad de las Naciones, será posible debido a que las Naciones Unidas no habrán podido insistir en sus propios derechos.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Ahora suspenderemos la sesión para almorzar y nos reuniremos a las 15 horas.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

105a. SESION PLENARIA

*Celebrada en Flushing Meadow, Nueva York,
el sábado 1º de noviembre de 1947, a las 15 horas*

Presidente: Sr. O. ARANHA (Brasil).

57. Examen de nuevos proyectos, de acuerdos de administración fiduciaria (*continuación*)

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de México.

Sr. PADILLA NERVO (México) (*traducido del inglés*): Tenemos ante nosotros el informe de la Cuarta Comisión (documento A/422) relativo a la cuestión del África Sudoccidental. En ese informe se pone en conocimiento de la Asamblea General que el representante de la Unión Sudafricana define la actitud de su Gobierno con respecto a esta cuestión en la forma siguiente: en primer lugar, el Gobierno de la Unión Sudafricana no procederá a la incorporación del África Sudoccidental. En segundo, no se considerará jurídicamente obligado a proponer un acuerdo de administración fiduciaria para el territorio; en tercer lugar, no puede eludir por más tiempo los deseos de la gran mayoría de los habitantes del África Sudoccidental, quienes se han pronunciado a favor de la incorporación, colocando el territorio bajo el régimen de administración fiduciaria; y en cuarto lugar, continuará manteniendo el *statu quo*, administrará el territorio conforme al espíritu del mandato y transmitirá a las Naciones Unidas, a título informativo, un informe anual sobre la administración del territorio del África Sudoccidental.

El año pasado, cuando la Asamblea General consideró la cuestión de la propuesta incorporación del África Sudoccidental a la Unión Sudafricana, la delegación de México expuso en el debate general de la Cuarta Comisión y en la discusión de la resolución aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1946,¹ la opinión y la actitud del Gobierno de México con respecto a los principios implicados en este asunto. Ahora deseo formular algunas observaciones con respecto a la decisión tomada por el Gobierno de la Unión Sudafricana sobre dicha recomendación de la Asamblea General, y deseo hablar

a favor de la recomendación que nos ha presentado la Cuarta Comisión.

Nos ha causado satisfacción saber que el Gobierno de la Unión Sudafricana decidió no proceder a la incorporación del territorio, y ver que al respecto está de acuerdo con los términos de la resolución de la Asamblea General. Lamentamos profundamente que la Unión Sudafricana se niegue a proponer a la consideración de la Asamblea General un acuerdo de administración fiduciaria para el territorio bajo mandato del África Sudoccidental.

El Gobierno de la Unión Sudafricana, para justificar su negativa, insiste en que el deseo claramente expresado por la gran mayoría de todas las personas de razas indígenas del África Sudoccidental a favor de la incorporación a la Unión Sudafricana, no permite que el Gobierno actúe de acuerdo con la resolución de la Asamblea General.

Estamos completamente en desacuerdo con este argumento.

El año pasado el Gobierno de la Unión invocó la misma razón, el deseo de la población de ser anexada. La Asamblea General no consideró que esa fuera una razón válida y se negó a aceptar la incorporación del territorio del África Sudoccidental. La Asamblea General consideró, en diciembre último, que los habitantes africanos del África Sudoccidental todavía no habían obtenido la autonomía política ni llegado a un estado de desarrollo político que les capacitara para expresar una opinión madura que la Asamblea General pudiera reconocer sobre esa importante cuestión. ¿Cómo podría en tales circunstancias la Asamblea General admitir ahora, nueve meses más tarde, que los habitantes africanos del África Sudoccidental han logrado mientras tanto un estado de desarrollo político que les capacite para expresar una opinión madura que la Asamblea General pueda reconocer sobre un asunto tan importante como lo es la elección entre la administración fiduciaria y la anexión?

Mucho se ha dicho durante los debates sobre esta cuestión con respecto a la naturaleza de la obligación de colocar bajo el régimen de admi-

¹ Véanse las *Resoluciones adoptadas por la Asamblea General* en la segunda parte de su primer período de sesiones, resolución 65 (I), página 92.

nistración fiduciaria a los antiguos territorios bajo mandato. Se ha declarado que esta obligación es jurídica, que es moral y hasta se ha afirmado que no existe tal obligación.

Creo que nadie podría negar razonablemente que, en virtud de la Carta, existe la obligación jurídica de establecer un régimen internacional de administración fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que puedan ser colocados bajo este régimen. Pero ¿cómo podrían las Naciones Unidas cumplir con este solemne compromiso si aceptamos como válida la afirmación de que las Potencias mandatarias no tienen ni siquiera el deber moral de contribuir al cumplimiento de ese compromiso proponiendo y negociando acuerdos que en virtud de la Carta son condiciones previas para el establecimiento y el funcionamiento del régimen internacional de administración fiduciaria, que jurídicamente están obligadas a crear?

Las Naciones Unidas decidieron establecer el Consejo de Administración Fiduciaria. Nadie puede razonablemente negar que esto implica una obligación razonable de los Estados Miembros, inclusive de las Potencias mandatarias. Pero ¿cuál sería el significado de esta obligación si aceptamos como válida la afirmación de que las Potencias mandatarias no tienen ni siquiera la obligación moral de colocar a los territorios bajo mandato bajo el régimen de administración fiduciaria, ya que la existencia de territorios en fideicomiso es una condición previa para la creación del Consejo? Si las Potencias mandatarias estuvieran en libertad desde un punto de vista jurídico, para negarse a presentar acuerdos de administración fiduciaria con respecto a los territorios bajo mandato, y si todas esas potencias hubiesen adoptado la actitud de la Unión Sudafricana, declarando sus intenciones de continuar administrando los territorios bajo mandato fuera del régimen de administración fiduciaria, creo que nadie podría negar que la obligación jurídica que mencioné anteriormente habría sido violada y que los altos principios y solemnes obligaciones contenidas en los Capítulos XI y XII de la Carta serían letra muerta.

La Carta reconoce derechos muy importantes de los Estados encargados de la administración de los territorios bajo mandato. Estos Estados tienen autoridad para proponer un proyecto de acuerdo de administración fiduciaria escogido por ellos mismos y para aceptar o rechazar las modificaciones de sus términos, autoridad que en cierto modo equivale al derecho de veto. Esta garantía debería incitar a las Potencias mandatarias a negociar los acuerdos de administración fiduciaria.

Podría haber diferencias de opinión con respecto a la interpretación de los Artículos 75, 77, 80 y otros del Capítulo XII de la Carta, pero espero que los miembros de esta Asamblea General no admitirán lo dicho en la Cuarta Comisión por el representante de la Unión Sudafricana, a saber que se podría poner en duda "la validez de la resolución de la Asamblea General".

Estimo que se correría un peligro muy grande en lo futuro si aceptáramos la tesis de que por no ser la Asamblea General una autoridad competente para promulgar reglas de derecho internacional, sus recomendaciones pudieran ser desatendidas cuando los Estados interesados consideraren que tenían razones imperiosas para hacerlo. La Asamblea General no podría adoptar

ninguna medida útil si todos los miembros no reconocen en todo caso la misma fuerza de estas decisiones.

El Gobierno de la Unión Sudafricana ha decidido no colocar el territorio bajo mandato del Africa Sudoccidental bajo el régimen de administración fiduciaria, y continuar manteniendo el *statu quo* y administrando el territorio conforme al mandato. Estimo que esta actitud no se conforma con el espíritu y propósito del Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas que dispone que a todos los territorios que anteriormente estuvieron bajo mandato debe concedérseles la independencia, o colocárseles bajo el régimen internacional de administración fiduciaria.

¿Podría decirse que el cuarto párrafo del preámbulo de la resolución que tenemos ante nosotros (A/422) va demasiado lejos? No es esa nuestra opinión. Creemos que las discusiones desarrolladas en San Francisco con respecto a este asunto, que concluyeron con el establecimiento del régimen internacional de administración fiduciaria, son de por sí una prueba de que las Potencias signatarias estaban determinadas a asegurar que los territorios bajo mandato continuarían bajo la vigilancia internacional. Estaban determinadas a asegurar que los territorios bajo mandato no se reducirían de nuevo al estado de colonias por el solo hecho de haberse liquidado la Sociedad de las Naciones y haber terminado el sistema de mandatos. La Carta, que es muy superior al Pacto de la Sociedad de las Naciones como instrumento internacional de cooperación, debía contener y efectivamente contiene principios que representan un progreso y no un retroceso con respecto al sistema de mandatos.

Se ha dicho que el mundo realizó un progreso notable cuando entró en vigencia el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. ¿Podríamos ahora negar nosotros que el Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas no sólo se proponía sustituir al Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones sino, lo que es más importante, realizar un progreso en la misma dirección? Ni los autores de la Carta de las Naciones Unidas, ni los autores del Pacto de la Sociedad de las Naciones tuvieron nunca la intención de que los territorios bajo mandato volvieran a la situación de colonias. El Africa Sudoccidental no será sino una colonia si aceptamos la actitud tomada por el Gobierno de la Unión Sudafricana.

El representante de la Unión Sudafricana declaró en la Cuarta Comisión que indudablemente el mantenimiento del *statu quo* significa que el Gobierno de la Unión Sudafricana sostenga que el territorio bajo mandato es una colonia. El Gobierno de la Unión Sudafricana reconoce que dicho territorio no es una colonia.

Sin embargo, si el territorio ya no es un mandato y si nunca será un territorio en fideicomiso ¿qué resultará? El representante de la Unión Sudafricana crea una nueva y anómala categoría al declarar que la situación del territorio será *sui generis*. El representante de los Estados Unidos de América declaró con mucho acierto en la Cuarta Comisión que la Unión Sudafricana "no tiene derecho jurídico sobre el Territorio de Africa Sudoccidental".

Hay dos características esenciales comunes a todos los mandatos: primero, que la Potencia mandataria se compromete a administrar el terri-

torio interesado no en su nombre sino en nombre de la Sociedad de las Naciones; segundo, que dichos territorios quedaron sometidos al control internacional.

El Mariscal Smuts, que puede considerarse como el padre del sistema de mandatos, propuso que con respecto a los territorios que pertenecieron a las Potencias de Europa o a las del Cercano Oriente que fueron vencidas, se considerara a la Sociedad de las Naciones como "la titular de un derecho de reversión en el sentido más general, y como investida del poder de disponer de estos territorios en última instancia, conforme a principios fundamentales. El retorno a la Sociedad de las Naciones debería sustituir a toda política de anexión nacional".¹

El Mariscal Smuts resumió sus puntos de vista al respecto en las siguientes recomendaciones: "Toda autoridad, control o administración que se necesite con respecto a estos territorios y poblaciones, fuera de su autonomía libremente escogida, será ejercida *por la Sociedad de las Naciones, o en su nombre*, en virtud de un poder del que será exclusivamente investida".²

Agregaría que no solamente las Naciones Unidas expresaron claramente en la Carta la intención de que los territorios bajo mandato fuesen colocados bajo un régimen internacional de administración fiduciaria, sino que además los miembros de la Sociedad de las Naciones, en la 21a. y última sesión de la Asamblea en la cual tuve el honor de representar a mi Gobierno, se preocuparon del destino de los territorios bajo mandato después de la disolución de la Sociedad de las Naciones; expresaron claramente que deseaban que estos territorios bajo mandato fuesen colocados bajo el régimen internacional de administración fiduciaria a su debido tiempo.

Permítaseme leer dos o tres párrafos de esa resolución que dice en parte:

"Recordando que el Artículo 22 del Pacto se aplica a ciertos territorios colocados bajo mandato, el principio del bienestar y el desarrollo de los pueblos que todavía no son capaces de gobernarse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno, constituye una misión sagrada de civilización... [la Asamblea] reconoce que la disolución de la Sociedad de las Naciones pondrá término a estas funciones en lo que concierne a los territorios bajo mandato, pero observa que los principios correspondientes a los que figuran en el Artículo 22 del Pacto han sido incorporados en los Capítulos XI, XII y XIII de la Carta de las Naciones Unidas; observa que los miembros de la Sociedad que administran actualmente territorios bajo mandato han expresado su intención de continuar administrándolos en vista del bienestar y del desarrollo de los pueblos interesados, de conformidad con las obligaciones contenidas en los diversos mandatos, hasta que se concluyan nuevos arreglos entre las Naciones Unidas y las diversas Potencias mandatarias."³

Estimo que no hay razón para suprimir el cuarto párrafo del preámbulo de la resolución

¹ Véase *El Sistema de Mandatos. Origen-Principios-Aplicación* (Sociedad de las Naciones, Ginebra, 1945) página 15 del texto francés.

² *Idem.*, página 16.

³ Véase el *Journal officiel de la Société des Nations*, Suplemento especial No. 194, Anexo 24, página 254.

contenida en el documento A/422. Su inclusión no significa de ninguna manera que la Potencia mandataria tenga la obligación jurídica de presentar un acuerdo de administración fiduciaria. Unicamente significa que en el espíritu de la Carta los territorios bajo mandato en lo futuro deben estar en fideicomiso o alcanzar la independencia. Este párrafo, a mi parecer, es una declaración de fe ya hecha en la Carta. Su propósito es reafirmar nuestra creencia en la necesidad de perseguir siempre la evolución progresiva de la política colonial. Las Potencias mandatarias individualmente han hecho declaraciones en diversas ocasiones en ese sentido y en general, especialmente en época reciente, han actuado de conformidad. Por consiguiente, no hay razones fundamentales para oponerse ahora a este párrafo. Las Potencias mandatarias no deben temer la opinión de la mayoría de la Asamblea General, y no deben tratar de evitar que se apruebe esta resolución insistiendo en que se necesita una mayoría de dos tercios. Espero que sea aprobada aunque a juicio de la Asamblea General, se necesite una mayoría de dos tercios. Espero que esta Asamblea General podrá aceptar la recomendación aprobada por la Cuarta Comisión y que el Gobierno de la Unión Sudafricana reconsiderará su decisión.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Ahora hay ocho oradores inscritos en la lista. Son los representantes de la India, China, Colombia, Guatemala, Países Bajos, Haití, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay. Deseo anunciar a la Asamblea General que a las 16 horas quedará cerrada la lista de oradores.

Tiene la palabra el representante de la India.

Sra. PANDIT (India) (*traducido del inglés*): No tenía intención de intervenir en este debate, pero algunos representantes han hecho declaraciones que son de gran importancia y que suscitan problemas de orden moral de tanto alcance que considero necesario exponer claramente y sin equívocos la actitud de mi delegación.

Se han hecho declaraciones muy enérgicas que en realidad significan que esta Asamblea debería en el porvenir desinteresarse completamente de la suerte del territorio bajo mandato del Africa Sudoccidental. Se insiste en que la Asamblea General no apruebe ninguna resolución frente a lo que constituye claramente, por parte de la Unión Sudafricana, una negativa a conformarse con lo dispuesto por la Asamblea General el año pasado, a saber, poner el Africa Sudoccidental bajo el régimen internacional de administración fiduciaria.

Se pretende que el Gobierno de la Unión no tiene ninguna obligación, ni moral ni jurídica, de colocar al Africa Sudoccidental en fideicomiso, y que no puede objetarse a la actitud tomada por el Gobierno de la Unión Sudafricana.

Deseo subrayar con toda gravedad que ese punto de vista eliminará de un solo golpe la obra realizada durante los 30 últimos años en materia de administración fiduciaria internacional y retrasará el progreso logrado.

El sistema de los mandatos consistía especialmente en colocar ciertos pueblos poco evolucionados bajo la tutela de la Sociedad de las Naciones, protegidos por la conciencia universal. Es verdad que la administración de esos territorios

fué confiada a determinadas Potencias, pero se trataba de una misión sagrada. Cualquiera que sea la situación jurídica que resulte de la disolución de la Sociedad de las Naciones y de la creación de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo siempre han creído, y en verdad sin que se haya dicho lo contrario, que las Naciones Unidas asumían el papel de la Sociedad de las Naciones en todas las cuestiones relativas a la autoridad moral. En realidad, en estas premisas se basan nuestros trabajos, y por eso hemos continuado en la Asamblea General las tareas que la Sociedad de las Naciones realizaba con tanta eficacia, por ejemplo, la represión de la trata de blancas, derechos sindicales, etc.

Además, nosotros con toda justicia y con plena aprobación del mundo entero hemos agrandado el campo de nuestras actividades. ¿Vamos a decir, cuando se trata de una cuestión de las más importantes y en la cual cifran sus esperanzas los pueblos poco evolucionados, que el sistema de los mandatos desapareció con la Sociedad de las Naciones y que es preciso resucitarlo?

No hay absolutamente ninguna duda, y en realidad nunca se ha objetado, a que los territorios puestos bajo el sistema de fiscalización internacional continuarán bajo la misma hasta que sus pueblos fuesen capaces de asumir las responsabilidades de su propio gobierno.

El mismo Gobierno de la Unión Sudafricana, aunque de mala gana, reconoce la validez de esta actitud al afirmar que se propone administrar al Africa Sudoccidental en el espíritu del mandato. El espíritu del mandato es el control internacional. Si, como lo sostiene, se propone administrar al Africa Sudoccidental en el espíritu del mandato, entonces ¿por qué se refugia detrás de argucias jurídicas?

El Gobierno de la Unión Sudafricana ha pretendido que no tiene ninguna obligación ni moral ni jurídica de colocar al Africa Sudoccidental bajo el régimen internacional de administración fiduciaria. Yo no pretendo ser un jurista, pero hablando estrictamente desde el punto de vista del sentido común y en vista de la historia del último cuarto de siglo, me parece sorprendente que se pueda declarar ante esta Asamblea General, ante las naciones del mundo, que no existe ninguna obligación moral en la materia. En ese caso la Carta sólo sería una mezcla de palabras; no tendría sentido, si no estuviera apoyada por el espíritu que la respalda y que inspiró a los pueblos del mundo a reunirse para resolver sus problemas comunes.

El Sr. Evatt ha rendido al Mariscal Smuts un gran y bien merecido homenaje. Estoy completamente de acuerdo con él al estimar que la Organización debe mucho al Mariscal Smuts. Pero la declaración del Sr. Evatt equivale a decir: dejemos esta cuestión a la cordura, a la experiencia y a las cualidades de estadista del Mariscal Smuts y lo que él haga a este respecto nos satisfará ampliamente.

El problema ante el cual nos encontramos trasciende toda consideración personal. El respeto que podamos tener por una personalidad eminente no debe hacernos olvidar la suerte de centenas de miles de habitantes del Africa Sudoccidental que esperan que esta Asamblea proteja sus intereses.

Por consiguiente, espero que los representantes pesarán a conciencia estas consideraciones antes de tomar una decisión definitiva. Con el permiso del Sr. Presidente, mi colega hará más tarde una nueva declaración sobre los méritos respectivos de las diversas resoluciones.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de China.

Sr. CHIEH (China) (*traducido del inglés*): Ante nosotros tenemos un proyecto de resolución de la India (documento A/422) aprobado por la Cuarta Comisión. Esta resolución insta al Gobierno de la Unión Sudafricana a que presente a la Asamblea General, en su próximo período de sesiones, un acuerdo de administración fiduciaria para el territorio del Africa Sudoccidental.

La enmienda de Dinamarca (documento A/429) trata evidentemente de atenuar la forma del proyecto de resolución expresando la esperanza de que el Gobierno de la Unión pueda presentar este acuerdo de administración fiduciaria oportunamente para que la Asamblea General lo examine en su próximo período de sesiones. En la enmienda se propone también que se suprima un párrafo del preámbulo del proyecto de resolución (documento A/422). La delegación de China estima que estos dos textos son muy semejantes y no tiene ninguna objeción que formular contra la enmienda propuesta por la delegación de Dinamarca. La delegación de China está hasta dispuesta a votar en su favor.

Sin embargo, mi delegación no podría suscribir las razones presentadas por la delegación de Dinamarca, para justificar esta modificación del texto. En primer lugar las delegaciones que votaron en la Comisión a favor del proyecto de resolución, en el que se pide la presentación de un acuerdo de administración fiduciaria a la Asamblea General en el próximo período de sesiones, jamás tuvieron la intención de presentar un ultimátum.

Puede recordarse que en la resolución aprobada en la primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea General en Londres,¹ se invitaba a las Potencias mandatarias a que presentaran acuerdos de administración fiduciaria durante la segunda parte del mismo período de sesiones, y que por lo menos ocho acuerdos de esta naturaleza fueron presentados, es decir, que todas las Potencias mandatarias a excepción de la Unión Sudafricana, presentaron proyectos de acuerdos, aunque sólo habían transcurrido seis meses. Indudablemente, se había fijado una fecha límite, pero únicamente para mayor comodidad, y sólo para mayor conveniencia y urgencia, y esa medida no debería interpretarse en ninguna forma como un ultimátum. Me parece que quienes desean colocar a la Unión Sudafricana en una posición excepcional y privilegiada entre las Potencias mandatarias han interpretado que esta resolución tiene cierto sentido de coacción.

¿Podría ahora abordar la cuestión del procedimiento y preguntar si se necesita una mayoría de dos tercios de los votos en este caso? Quisiera ver el proyecto de resolución aprobado por una mayoría abrumadora, como lo fué en la última Asamblea General, hace un año, tratándose de

¹ Véanse las *Resoluciones aprobadas por la Asamblea General* en la primera parte del primer período de sesiones, resolución 9 (I), página 13.

una resolución idéntica; pero desde el punto de vista del procedimiento no estimo que sea necesaria una mayoría de dos tercios ya que el fondo de la resolución, a saber, la presentación de un acuerdo de administración fiduciaria para el África Sudoccidental, ya fué decidido el año pasado. La resolución actual no introduce nuevos elementos, ni se propone hacer frente a una nueva situación.

Las actas de las sesiones del último período de la Asamblea General, citadas esta mañana, presentan una discrepancia entre los textos en inglés y en francés, pero como el Sr. Spaak, entonces Presidente de la Asamblea General, hablaba en francés, parece que el texto que tiene más peso es el texto francés que no menciona la mayoría de dos tercios.

En cuanto a la parte de la enmienda de Dinamarca encaminada a suprimir el párrafo del preámbulo que expresa las intenciones de la Carta, la delegación de China no cree que suprimiendo el párrafo en cuestión se modifique el objetivo o el efecto de la resolución, pero subraya enérgicamente que la supresión del párrafo no debe interpretarse en el sentido de que implica que se acepta la sugestión de ciertos partidarios de la enmienda según la cual los autores de la Carta no tuvieron la intención de que todos los territorios bajo mandato fuesen colocados bajo el régimen de administración fiduciaria.

En virtud de los términos del Pacto de la Sociedad de las Naciones, la Potencia mandataria estaba autorizada a administrar un territorio bajo mandato como una misión sagrada, a nombre de la Sociedad de las Naciones. Todo mandato fué y sigue siendo un compromiso internacional, un acuerdo internacional y una misión internacional. No es una cuestión que pueda ser resuelta por una sola nación, cualquiera que fuese. Estoy convencido de que en la época de la Conferencia de San Francisco, muchas delegaciones dieron por sabido que cuando terminase la Sociedad de las Naciones, los territorios bajo mandato serían colocados bajo el régimen internacional de administración fiduciaria, en el cual no sólo se preveía una prolongación del sistema de mandatos sino un mejoramiento del mismo. Si no se encuentran en la Carta disposiciones más precisas para todos los territorios bajo mandato, se debe, a mi juicio, a que se podía conceder inmediatamente su independencia a alguno de ellos, como efectivamente ocurrió. El carácter facultativo de estas disposiciones se proponía también conceder cierta libertad en la formulación de los términos de los acuerdos de administración fiduciaria que serían negociados.

Nada se alejaría más de las intenciones de los autores de la Carta que permitir que al crear un régimen internacional de administración fiduciaria destinado a reemplazar el de los mandatos, cualquiera de los territorios bajo mandato no fuese sometido al control internacional. En la Comisión se ha pretendido que el Pacto de la Sociedad de las Naciones no autorizaba la transferencia de territorios bajo mandato a las Naciones Unidas. A esto respondo que los autores del Pacto no podían prever los acontecimientos que condujeron a la disolución de la Sociedad de las Naciones, a la supresión del sistema de los mandatos y a la creación de las Naciones Unidas y del régimen internacional de administración fidu-

ciaria. Además, la Sociedad de las Naciones, en una de sus últimas reuniones, aprobó por unanimidad la resolución en que se ordenaba a las Potencias mandatarias que continuaran administrando los territorios bajo mandato conforme a las obligaciones de sus respectivos mandatos hasta que se concluyeren otros acuerdos entre las Naciones Unidas y dichas Potencias mandatarias.

Me parece difícil estar de acuerdo sobre ciertos puntos con el Presidente de la delegación de Australia, quien contribuyó tan notablemente a la creación del régimen internacional de administración fiduciaria. Estimo que ha prestado un gran servicio a las Naciones Unidas al presentar el acuerdo de administración fiduciaria para Nauru en el momento en que se trataba de limitar el campo de aplicación del régimen internacional de administración fiduciaria y de retardar el desarrollo de este último.

No quiero comenzar un largo debate sobre la cuestión de si existe en la Carta una obligación jurídica al respecto, puesto que ninguna obligación jurídica o moral podría quedar más claramente demostrada que por medio de las resoluciones sucesivas que la Asamblea General, como representante de la conciencia del mundo, ha aprobado al respecto. También puede objetarse que sea necesario encontrar disposiciones de carácter obligatorio porque, en virtud del Artículo 77 de la Carta, el régimen internacional de administración fiduciaria se aplica a tres categorías de territorios, de los cuales la primera está constituida por los territorios que actualmente están bajo mandato. Las medidas de carácter voluntario no se mencionan sino con respecto a la tercera categoría de territorios y sería difícil considerar que éstas se aplican a los territorios bajo mandato. El empleo de la palabra "voluntariamente" en el párrafo consagrado a la tercera categoría de territorios da la impresión de que para las otras categorías se trata de una obligación, especialmente en lo que concierne a los territorios bajo mandato, expresamente citados y sobre los cuales se insiste en el párrafo 2 del Artículo 80 de la Carta, que no admite que sea demorada ni diferida la negociación y la celebración de acuerdos para aplicar el régimen internacional de administración fiduciaria a territorios bajo mandato.

Por consiguiente, estimo que incumbe especialmente a la Potencia mandataria colocar bajo el régimen internacional de administración fiduciaria a los territorios bajo mandato; la Asamblea General reconoció esta obligación cuando en su resolución del 9 de febrero de 1946 pidió que los territorios bajo mandato fuesen colocados bajo el régimen internacional de administración fiduciaria. El hecho de que todas las Potencias mandatarias, con una sola excepción, presentaron acuerdos de administración fiduciaria en respuesta a esta resolución confirma que existe tal obligación.

Aunque se haya insistido mucho en que no existía ninguna obligación jurídica para colocar un territorio bajo mandato dentro del régimen internacional de administración fiduciaria, hasta ahora todavía no he oído ningún argumento jurídico que justifique el procedimiento contrario. Se nos ha dicho que la Unión Sudafricana administrará el territorio del África Sudoccidental en el espíritu del mandato de la Sociedad de las

Naciones. Pongo en duda la sinceridad de la declaración de la Unión Sudafricana; además, todos sabemos que el sistema de los mandatos ha cesado de existir y que ha sido establecido el régimen de administración fiduciaria. ¿No sería preferible administrar dicho territorio conforme a un régimen actualmente existente y no según un régimen ya desaparecido?

Algunos representantes nos han recordado que el Mariscal Smuts desempeñó un papel preponderante en la elaboración del sistema de mandatos después de la primera guerra mundial. Soy el primero en rendir homenaje, como lo hice el año pasado, a ese eminente estadista. Por esta sola razón, aunque no sea por otras, esperamos que la Unión Sudafricana pueda presentar a la Asamblea General en su tercer período ordinario de sesiones un acuerdo de administración fiduciaria para el África Sudoccidental.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Bélgica sobre una cuestión de orden.

Sr. RYCKMANS (Bélgica) (*traducido del francés*): Sr. Presidente, el representante de los Estados Unidos de América señaló esta mañana que en el texto en inglés del *Journal of the United Nations*, la declaración que hizo el Presidente durante la sesión del 14 de diciembre de 1946¹ figura en los siguientes términos: "Creo que sería mejor proceder a votación nominal, ya que esta cuestión exige una mayoría de dos tercios y deseo evitar errores".

El texto en francés del *Journal* dice: "*Je crois qu'il est prudent de procéder à un appel nominal pour ce vote, car je ne voudrais pas commettre une erreur de dénombrement*". En este texto no se trata de una mayoría de dos tercios.

En vista de esta discrepancia he querido asegurarme de lo que el Presidente dijo en realidad, y gracias a la cortesía y eficiencia de los servicios de la Secretaría de las Naciones Unidas, a los cuales tengo el gusto de rendir homenaje, acabo de escuchar el disco. He oído con emoción la voz de nuestro Presidente. Este dijo el año pasado las palabras siguientes (cito textualmente): "*Messieurs, je crois qu'il est plus prudent de procéder à un appel nominal pour ce vote, car nous devons obtenir la majorité des deux tiers et je ne voudrais pas commettre une erreur*".

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Este punto, que el representante de Bélgica acaba de precisar, exige una aclaración y será examinado oportunamente por la Asamblea General, que decidirá si se necesita la mayoría de dos tercios. Entonces tendremos el gusto de oír el disco que contiene las declaraciones del Sr. Spaak, ex presidente de la Asamblea.

Tiene la palabra el representante de Colombia.

Sr. YEPES (Colombia) (*traducido del francés*): La delegación de Colombia votará en contra de la supresión del párrafo cuarto de la resolución propuesta por la Cuarta Comisión porque pensamos que el Artículo 77 de la Carta impone una obligación jurídica y no únicamente un deber de carácter moral. En efecto, este Artículo precisa que el régimen internacional de administración fiduciaria se aplicará, entre otros, a los territorios

que actualmente están bajo mandato. La fórmula imperativa que figura en el texto inglés del Artículo 77, "*shall apply*", no deja ninguna duda al respecto. Lo mismo ocurre con el texto en español que dice: "El régimen de administración fiduciaria se aplicará".

Si el Artículo 77 no impone una obligación jurídica, como se ha sostenido desde esta tribuna, entonces ¿a nombre de quién se ejercería el mandato de la antigua Sociedad de las Naciones?

No sería indudablemente a nombre de la Sociedad de las Naciones, porque ésta ya no existe; tampoco podría ejercerse a nombre de una institución muerta. En derecho civil, todos lo sabemos, la procuración termina con la muerte del mandatario. Lo mismo ocurre, por analogía, en derecho internacional. Podemos deducir de ello que, desde el momento en que la Sociedad de las Naciones es un organismo muerto, los mandatos ejercidos bajo su autoridad también han desaparecido, y que los territorios interesados deben quedar comprendidos en el régimen internacional de administración fiduciaria establecido por el Artículo 77 de la Carta.

En la Conferencia de San Francisco, la delegación de Colombia tuvo el gran honor de proponer que el principio del respeto de la buena fe como base fundamental de toda la vida internacional, figurase en el Artículo 2 de la Carta. Aquí se trata de una cuestión de buena fe en la interpretación de la Carta. La buena fe que es ahora obligatoria para todos los Miembros de las Naciones Unidas nos impone deberes, declara el Artículo 1 de la Carta, cuyo segundo punto dice así: "Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos...".

Además, el Artículo 73 de la Carta estipula: "Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del Gobierno propio reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacional establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios...".

Mi delegación estima que la buena fe nos obliga a decidir que todos los territorios colocados anteriormente bajo el sistema de mandatos de la antigua Sociedad de las Naciones deben ser sometidos al régimen internacional de administración fiduciaria establecido por la Carta de las Naciones Unidas, y estimamos, en consecuencia, que es preciso mantener el cuarto párrafo de la resolución propuesta por la Cuarta Comisión.

Aun si no se acepta el carácter obligatorio del Artículo 77, es preciso convenir, según el espíritu de la Carta, que todos estos territorios bajo mandato deben ser colocados bajo el régimen internacional de administración fiduciaria. Esto es lo que estipula la resolución en su cuarto párrafo, que se nos propone ahora suprimir y que dice lo siguiente (documento A/422):

"Considerando que el fin manifiesto del Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas es que todos los territorios anteriormente bajo mandato sean colocados bajo el régimen internacional

¹ Véase el *Journal of the United Nations*, No. 63 del 19 de diciembre de 1946, suplemento A-A/P.V/64, página 679.

de administración fiduciaria hasta que se les conceda la autonomía o la independencia..."

"En un manifiesto" como dice la resolución o "en espíritu", como nosotros decimos, es la misma cosa.

Nosotros nos inclinamos a considerar la parte final de la modificación propuesta por la delegación de Dinamarca como una transacción aceptable para la Unión Sudafricana, y así se eliminarían de la resolución definitiva los defectos que le han sido reprochados. Nuestra actitud sobre esta cuestión se inspira en consideraciones exclusivamente jurídicas y en nuestro deseo de que prevalezcan los principios esenciales de la Carta. No queremos votar por nada que la Unión Sudafricana pueda considerar como una censura. Lejos de ello, nuestro deseo es simplemente que se respete la letra y el espíritu de la Carta.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Deseo pedir al Secretario General Adjunto que lea los nombres de los países cuyos representantes figuran en la lista de los oradores. Dicha lista se cerrará inmediatamente.

Sr. Hoo (Secretario General Adjunto a cargo del Departamento de Administración Fiduciaria) (*traducido del inglés*): Los nombres de los siguientes países figuran en la lista de oradores: Guatemala, Países Bajos, Haití, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Siria, Pakistán, Irak India, Unión Sudafricana y Liberia.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de Bélgica deseaba tomar la palabra sobre una cuestión de orden. Sin embargo, no creo que desee intervenir ahora en la Asamblea General sobre esta cuestión.

Por consiguiente tiene la palabra el representante de Guatemala.

Sr. MENDOZA (Guatemala): La delegación de Guatemala ha seguido con el mayor interés, desde el año pasado, los debates de la Asamblea General sobre la cuestión del África Sudoccidental. Como una cuestión de principios, mi delegación se opuso a la incorporación del territorio del África Sudoccidental a la Unión Sudafricana; y como una cuestión de principios también, sostiene que la Unión Sudafricana tiene una obligación jurídica ineludible de someter el África Sudoccidental al nuevo sistema de administración fiduciaria, creado en la Carta de las Naciones Unidas.

En concepto de la delegación de Guatemala esa obligación está muy clara en el texto del inciso a del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta. La opinión de la delegación de Guatemala en este asunto se mantiene igual y firme en este momento de la discusión.

Con el mayor respeto, pero con profunda sorpresa, ha escuchado mi delegación la insistencia con que algunas representaciones han querido dar a la letra clarísima de ese Artículo, una interpretación diferente. No deseo repetir aquí lo que se ha dicho acerca de esa obligación en el prolongado debate del año pasado y en el presente; pero deseo llamar la atención de la Asamblea General sobre la situación actual.

La Unión Sudafricana no tiene título alguno sobre el África Sudoccidental. No es propietaria de ese territorio, no tiene soberanía sobre él, lo administra simplemente en virtud de un mandato, es decir, lo administra en nombre ajeno y de ninguna manera en nombre propio. La Sociedad

de las Naciones le otorgó ese mandato, y la Unión Sudafricana ha administrado el territorio en nombre de aquella entidad, pero el mandante no existe ya. ¿Ha heredado la Unión Sudafricana los derechos y las atribuciones de la Sociedad de las Naciones y puede, en consecuencia, continuar administrando ese territorio en nombre propio? De ninguna manera. El mandatario administra ahora ese territorio en nombre de los herederos de la Sociedad de las Naciones, y tiene una obligación jurídica de acatar la voluntad de esos herederos. Tales herederos evidentemente son las Naciones Unidas, y ellas han expresado ya su voluntad con relación al África Sudoccidental en forma sumamente clara. Los herederos de la Sociedad de las Naciones desean que el territorio del África Sudoccidental sea colocado bajo el nuevo sistema de administración fiduciaria. Así lo expresa categóricamente la resolución de la Asamblea General No. 65 (I), aprobada el 14 de diciembre de 1946.

En consecuencia, y suponiendo, sin aceptar, desde luego, que la Unión Sudafricana no tuviera una obligación jurídica de someter ese territorio al régimen de administración fiduciaria por disposición concreta de la Carta, en todo caso tiene la obligación jurídica de cumplir la voluntad de los herederos de la extinta organización mandante, y esa voluntad, como lo acabo de decir, está clara y categóricamente expresada.

La delegación de Guatemala apoya el proyecto de resolución aprobado por la Cuarta Comisión y no está de acuerdo con la supresión del cuarto considerando, porque está convencida de que ese es realmente el significado del inciso a del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta.

Mi delegación, en el seno de la Comisión, sugirió que las Naciones Unidas fijaran a la Unión Sudafricana un término perentorio para cumplir con esta obligación. Ese término está también claramente expresado en el proyecto de resolución aprobado por la Comisión. Sin embargo, si con un espíritu de gran conciliación se dispusiera suprimir esa condición al texto de la resolución propuesta, mi delegación no tendría objeción en votarla, si esa fuera la voluntad de la Asamblea.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de los Países Bajos.

Sr. KERN CAMP (Países Bajos) (*traducido del inglés*): Con respecto a la cuestión del África Sudoccidental, mi delegación estima que la situación actual de este territorio bajo mandato es anormal.

El sistema de mandatos no funciona ahora. Como ya no hay una autoridad fiscalizadora, ya no existe en realidad el sistema de mandatos. La transmisión voluntaria de información al Consejo de Administración Fiduciaria por parte de la Unión Sudafricana, únicamente a título informativo, no da al Consejo la misma jurisdicción de que estaba investida la Comisión Permanente de Mandatos.

En segundo lugar, a nuestro juicio, el régimen internacional de administración fiduciaria constituye un progreso en comparación con el sistema de mandatos. Por consiguiente, nadie debería tratar de salvar lo que queda de ese antiguo sistema.

En tercer lugar, consideramos que la situación actual constituye un retroceso cuando se refiere a un territorio que anteriormente estuvo bajo

la fiscalización internacional y queda ahora sin ninguna fiscalización; además no ha sido preparado para la independencia, ni ha sido incorporado con su libre consentimiento a otro territorio soberano.

Además, mi delegación se siente casi segura de que en virtud de los términos de la Carta no existe ninguna obligación jurídica para colocar bajo el régimen de administración fiduciaria a un territorio bajo mandato. En la Cuarta Comisión hemos expuesto extensamente nuestros argumentos, todos basados en la Carta, a favor de este punto de vista, y no voy a repetirlos aquí, como lo han hecho otros muchos representantes. Únicamente pidiendo una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia podría tenerse la absoluta seguridad sobre este punto, por ser ésta una autoridad jurídica, y no por una declaración hecha por nosotros en uno o en otro sentido en un organismo político.

Hay suficientes pruebas *prima facie*, no solamente para nosotros sino para gran número de Estados de que no existe tal obligación. No habiendo, a nuestro juicio, ninguna obligación jurídica, debemos oponernos enérgicamente al cuarto párrafo del preámbulo de la resolución que supone tal obligación jurídica. Lo único que podemos hacer es invitar a la Unión Sudafricana a que haga lo que le pedimos.

No nos gusta mucho la palabra "insta" como se emplea en la resolución y hubiéramos preferido la palabra "pide" que es un poco más cortés. Sin embargo, estimamos que tenemos que aceptar esta redacción únicamente como una transacción.

Si nosotros, Miembros de la Naciones Unidas, podemos basar nuestras exigencias únicamente en la fuerza moral, es indudable que no podemos votar a favor de una resolución como la propuesta por la Cuarta Comisión, que fija un plazo estricto. La fuerza moral requiere tiempo a fin de que produzca efectos. El Gobierno de la Unión Sudafricana no puede actuar en este asunto si el Parlamento no le autoriza para ello. El Parlamento a su vez no puede actuar si no cuenta con el apoyo de la opinión pública de la Unión Sudafricana. Si queremos ser razonables y justos debemos conceder a la opinión pública de la Unión Sudafricana algún tiempo para que acepte nuestro punto de vista. Estimamos que sería un tiempo considerable; en todo caso no puede ser exactamente un año, lo que es completamente ilógico. Por consiguiente, votaremos a favor de la enmienda propuesta por la delegación de Dinamarca (documento A/429) que no impone un plazo tan limitado.

Con respecto a la cuestión de la mayoría de dos tercios, estamos completamente de acuerdo con los argumentos presentados esta mañana por el representante de los Estados Unidos de América. Sin embargo, además de esos argumentos jurídicos podría preguntarse ¿cuál sería el efecto moral de una resolución que pueda ser aprobada solamente por una pequeña mayoría? Aun suponiendo por un momento que la Carta no requiera la mayoría de dos tercios, consideramos que el representante de la India debería exigir una mayoría de dos tercios, a fin de contar con el apoyo moral completo de la Organización.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Haití.

Sr. VIEUX (Haití) (*traducido del francés*): Parece que esta tarde se han suscitado dos cuestiones en la Asamblea General a propósito del asunto que se debate. La primera podría considerarse como una cuestión de procedimiento, y se refiere si no al modo de contar los votos, por lo menos a la mayoría necesaria para que la propuesta sea aprobada. La segunda es una cuestión de fondo encaminada a determinar si la resolución de la Cuarta Comisión será aprobada por la Asamblea General en sesión plenaria o si la enmienda presentada por Dinamarca tendrá preferencia.

No me detendré mucho en la cuestión de procedimiento. Me parece, Sr. Presidente, haber oído decir que esta cuestión será solucionada por la Asamblea en el momento de la votación. Supongo que en este caso, no es indispensable que los representantes expresen su opinión y se pronuncien inmediatamente de una manera definitiva.

Diré únicamente en caso de que me haya equivocado en la interpretación y sea necesario que la delegación de Haití exprese ahora mismo su punto de vista sobre esta cuestión, diré que, a nuestro juicio, no es preciso en este caso obtener una mayoría de dos tercios. El Artículo 18 de la Carta y el artículo 78 del reglamento combinados nos permiten pronunciarnos de una manera absoluta sobre este punto.

En efecto, consideramos que la lista de las "cuestiones importantes" para las cuales según la Carta se exige una mayoría de dos tercios es absolutamente limitativa, como lo son en derecho todas las restricciones; y puesto que el legislador — ya que en nuestras sesiones y nuestras reuniones se necesita un legislador — ha considerado necesario enumerar los casos que considera importantes y que pueden exigir la mayoría de dos tercios, no podemos, sin falsear el sentido del derecho, desplazar, o exceder los límites que ha previsto, ni proceder por un sistema de asimilación a la admisión de otros casos que nos parecerían similares. Me parece que todo esto es una cuestión de derecho estricto y que, por consiguiente, la Asamblea no puede y no podrá nunca pronunciarse sobre ella como no sea por simple mayoría.

Resuelto este punto, paso a la cuestión principal, es decir, a la actitud de la delegación de Haití en cuanto a la resolución que nos ha sido presentada. A nuestro juicio la cuestión presenta dos aspectos, uno humanitario y otro jurídico. Veo este aspecto humanitario cuando considero el efecto de nuestra decisión sobre la vida de cientos de miles de hombres. Ya se ha dicho que ningún hombre de buenos sentimientos puede permanecer impasible al pensar que nuestras deliberaciones pueden tener consecuencias incalculables no solamente para una parte importante de la humanidad, porque los hombres viven y pasan, lo que es normal, sino para una parte importante de la herencia más sagrada que posee la humanidad, es decir, la herencia ideológica de los valores humanos, morales y filosóficos transmitidos durante generaciones y que han hecho que el hombre haya alcanzado el estado del cual nos sentimos orgullosos.

Pienso que en el fondo de este debate, que no se refiere más que a algunos pueblos vagamente conocidos y que tal vez merecieran ser desconocidos hasta el presente, se suscita esta gran cuestión de la transmisión de todo lo que el hombre ha

hecho. Este aspecto humanitario general y generoso que impresiona al corazón, y que hace poco se me reprochó haber mencionado, me parece primordial. No me detendré en ello, aunque sea importante; no lo he citado más que como una introducción a la segunda cuestión puramente jurídica: la de saber si la resolución de la Cuarta Comisión presenta, desde el punto de vista de la razón, de la lógica, del derecho, razones netas y pertinentes para que podamos aprobarla.

Si estudio esta resolución bajo su aspecto puramente jurídico, compruebo que está verdaderamente bien fundamentada. En efecto, no puede dudarse de que desde el punto de vista jurídico la Unión Sudafricana debe colocar el territorio del Africa Sudoccidental bajo administración fiduciaria y hasta cierto punto está obligada a hacerlo.

Se ha citado el Artículo 77 de la Carta. A mi juicio, no deja ninguna duda sobre la filosofía de las Naciones Unidas, sobre los objetivos perseguidos por la Carta para guiar cada vez más a los pueblos atrasados hacia la luz y hacia una evolución que les permita asumir por sí mismos la responsabilidad de sus destinos sociales y políticos.

El Artículo 77 de la Carta, como ha señalado uno de los representantes en esta Asamblea, precisa que:

“El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes acuerdos:

“a. Territorios actualmente bajo mandato;

“b. Territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de Estados enemigos; y

“c. Territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su administración.”

Del empleo del término “voluntariamente” en el tercer caso, resulta que su omisión en los dos primeros casos es una demostración evidente de que todos los territorios que actualmente están bajo mandato deben ser inmediatamente colocados bajo el régimen de administración fiduciaria, lo quiera o no la Potencia mandataria.

No puede haber en ello ni la menor duda. Esto resulta de la interpretación clara y neta de los textos que tenemos a la vista. Por consiguiente, jurídicamente no tenemos ninguna duda sobre ello.

Además, como se ha dicho, el sentido, la filosofía de la Carta consiste precisamente en llegar a este resultado. Y, en verdad, si la letra debe oponerse al espíritu ¿quién de nosotros desearía atenerse a la letra? Todos sabemos que en materia de interpretación, el espíritu debe prevalecer. El espíritu de la Carta es claro: debemos guiar al mundo hasta cierto estado en el que abandonando el sistema colonial ascienda al sistema de mandato y en seguida pueda llegar al de administración fiduciaria, que está más de acuerdo con nuestros conceptos modernos según los cuales los pueblos deben ascender progresivamente en su civilización.

Por consiguiente, puesto que estoy animado por el espíritu de la Carta, puesto que me atengo a la letra de la Carta, y esto es indiscutible, ¿cómo no dejaría de reconocer la obligación jurí-

dica que tiene la Unión Sudafricana de colocar en fideicomiso al territorio del Africa Sudoccidental?

Yendo más lejos todavía, si considero ahora las consecuencias a que llegaríamos negándonos a reconocer este carácter obligatorio, sostengo que debe suceder lo que efectivamente ha sucedido: se nos ha dicho que en realidad el sistema de mandatos ha terminado, que ya no existe, pero que el territorio del Africa Sudoccidental no puede beneficiarse del régimen de administración fiduciaria. Entonces, ¿qué nos queda? ¿En qué situación nos encontramos?

Nos encontramos en presencia de una situación *de facto* y no *de jure*. Es necesario que los seres humanos o los Estados se gobiernen por un estatuto, cualquiera que éste sea. Conviene tener una definición, que permita la clasificación que necesita el espíritu para orientarse. ¿Cuál es, entonces, la situación que se ha creado?

Me parece que todos estamos convencidos, y que debemos reconocer la obligación jurídica que tiene la Unión Sudafricana de colocar en fideicomiso el territorio del Africa Sudoccidental.

Sin embargo, algunos miembros de la Comisión no han aceptado esta obligación jurídica. Se ha admitido que la Unión Sudafricana no está obligada a hacer lo que la razón y el texto de la Carta le obligan a hacer. Se ha admitido que en este caso sólo existe una simple obligación moral. Y debido a esta obligación moral, lejana, ligera, infinitamente vaga y nebulosa, la Comisión ha aprobado esta resolución que está ante nosotros y de la que me ocuparé ahora.

Deseo señalar que se aprobó esta resolución sólo para no admitir la obligación jurídica. Así fué cómo, precisamente, se trató de evitar que se ejerciera presión sobre la Unión Sudafricana y porque era preciso respetar su derecho, ¡sus derechos, y, acaso, hasta el mismo derecho de oponerse al espíritu de la Carta!

La más alta asamblea del universo, que agrupa a todos los Estados y a las conciencias humanas, ha creído que únicamente puede permitirse aprobar una resolución en la que se invite a la Unión Sudafricana a hacer lo que está obligada a hacer. Y ahora se encuentra que aun eso es demasiado y se pide a los Miembros de esta Asamblea, que es la más alta Asamblea del universo, que retrocedan todavía más sobre este punto, que ya había sido aceptado, y se disminuya todavía más la poca fuerza que se había querido demostrar, hasta que la resolución se debilite finalmente.

Yo no sé, señores, lo que pensarán en sus conciencias, de esto, y cómo y hasta qué punto creerán que están obedeciendo lo que las naciones humanitarias juraron observar el día en que invitaron a todos los pueblos, después de la más desastrosa de las guerras, a reunirse para crear una nueva civilización.

Lo que quiero señalar es que el texto de la resolución es muy claro. No quiero leerla de nuevo; otros ya lo hicieron aquí, y estoy muy agradecido por la atención que me han prestado, para que insista todavía más. Por consiguiente, no la volveré a leer puesto que ya la conocen. Ese texto es infinitamente vago; no impone ninguna obligación, ninguna coerción sobre la voluntad de otros pueblos; se contenta únicamente con recomendar e invitar a los pueblos en cuestión a comprender los derechos de cierta parte de la

humanidad que es todavía humana, admitámoslo, a pesar de su miseria. La enmienda propuesta por la delegación de Dinamarca tiende a suprimir dos cosas infinitamente importantes. Primero, tiende a suprimir la razón por la cual fué aprobada esta resolución en la Comisión. Segundo, tiende a suprimir el plazo concedido a la Unión Sudafricana para que cumpla las recomendaciones de la Comisión.

Así, aunque el espíritu de la Carta es claro y definido y todo lo que la Comisión hizo fué votar de acuerdo con ese espíritu y con los derechos soberanos de los pueblos — que también son de alguna importancia — estamos obligados, a fin de complacer a la Unión Sudafricana, a suprimir la única parte del preámbulo de la resolución que proclama nuestra fe en el futuro del mundo, en la que pedimos que se apruebe esta resolución porque corresponde a todo lo que consideramos humano, justo y aceptable para todas las conciencias.

No quiero abandonar el tono que conviene en este caso y hacer intervenir consideraciones sentimentales, que resultan inútiles en un debate puramente jurídico. Pero debe perdonárseme, por ejemplo, si mi lenguaje se apasiona debido a que se siente, o a que no se comprende en realidad muy bien, lo que aquí sucede. Como quiera que sea, estimo que suprimir el plazo de un año concedido a la Unión Sudafricana para que cumpla con las disposiciones de la Asamblea, sería alejarse de la resolución aprobada hasta tal punto que esta resolución no produciría casi resultados. La Unión Sudafricana podría posponer continuamente el cumplimiento de su obligación. Tampoco creo que Vds. quieran esto. Si se admitiese la enmienda de Dinamarca, el resultado sería el siguiente: la resolución aprobada, que ya es bastante débil, perdería tanto que resultaría casi inútil.

Por consiguiente pido que se rechace la enmienda y se apruebe la resolución tal como fué formulada y aprobada por la Cuarta Comisión.

El único argumento que podría presentar a favor de la tesis de la enmienda de Dinamarca sería que de aprobar la resolución que tenemos ante nosotros violentaríamos a la Unión Sudafricana. Pero ¿acaso no nos perjudicaríamos nosotros si renunciáramos a lo que creemos justo?

No creo que la cuestión merezca mayor debate.

La delegación de la República de Haití ha subido a esta tribuna para indicar que votará a favor de la resolución de la Cuarta Comisión y que votará en contra de la enmienda propuesta por la delegación de Dinamarca. Al hacerlo, lo repito, no trata de ninguna manera de olvidar los sentimientos de estimación que abriga para ciertos países, algunos de los cuales han sido mencionados aquí. Sabe el papel que estos países han desempeñado en el mundo y no trato de restarles importancia.

Pero la delegación de la República de Haití no cree que una preocupación por el pasado deba perjudicar nuestra actitud con respecto al porvenir. Consciente de que su país nació en circunstancias especiales, considera que cuando se trata de seres que sufren, que necesitan un poco de caridad y una condición mejor, debe intervenir para reclamar para ellos un poco de bienestar y una vida mejor.

El caso del territorio del África Sudoccidental es indudablemente uno de estos. La delegación de Haití ha intervenido únicamente por este motivo, y para tratar de definir su actitud en general.

Para terminar, recordaré unas palabras que se refieren al propio fondo del problema. Citaré las palabras de una de las mayores inteligencias que Francia ha conocido y uno de los corazones más fuertes que haya latido en dicho país. Se trata de ciertas palabras de Jaurés. Jaurés reprochaba, a alguien que hablaba de los grandes principios de la revolución francesa, de haber olvidado la llama de sus ideas para no conservar sino las cenizas.

Durante la época que hemos vivido, muchos sentimientos han nacido y han sido expresados; han surgido muchas ideas que han dado vida a los pueblos. Pero los representantes deberían recordar, cuando toman decisiones como éstas, que deben siempre mantener la llama de la esperanza en el porvenir del mundo y no aceptar que se les entierre en las cenizas.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Sr. STEIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (*traducido de la versión francesa del texto ruso*): En este momento examinamos en el informe de la Cuarta Comisión la parte que se refiere a la recomendación relativa al África Sudoccidental. Debemos examinar el texto de la recomendación aprobado por la Cuarta Comisión y la enmienda introducida a este texto por la delegación de Dinamarca. Precisamente a esto se refiere nuestro debate. Sin embargo, el Sr. Evatt representante de Australia ha considerado que debe proponernos que no adoptemos ninguna recomendación con respecto a la cuestión del África Sudoccidental. Pero no examinamos en este momento la cuestión de saber si es preciso o no aprobar una recomendación; se trata simplemente de decidir cuál debe ser el texto. Pero esto no ha perturbado al Sr. Evatt. Tampoco le ha preocupado saber que no se suscitó en la Cuarta Comisión el problema de si era preciso o no aprobar una recomendación respecto al África Sudoccidental, ya que únicamente surgieron divergencias con respecto al texto de los dos párrafos de esta recomendación.

Haciendo completamente caso omiso de la opinión de toda la Cuarta Comisión, el Sr. Evatt repentinamente aparece como el campeón de la Unión Sudafricana, y deseoso de complacer a los anexionistas sudafricanos trata de impedir que la presente Asamblea apruebe una resolución sobre esta cuestión. En otras palabras, el Sr. Evatt nos invita a revisar la decisión tomada el año pasado por la Asamblea General, que, por unanimidad, dirigió una solicitud a la Unión Sudafricana. Se sabe que el año pasado la Asamblea General recomendó al Gobierno de la Unión Sudafricana que le presentara un proyecto de acuerdo de administración fiduciaria. Además, se sabe que el Gobierno de la Unión Sudafricana se negó a cumplir esta recomendación y estableció en el África Sudoccidental un sistema jurídico absurdo según el cual el África Sudoccidental debe ser administrada "según el espíritu del mandato de la Sociedad de las Naciones". Digo que este sistema jurídico es absurdo porque ahora en 1947, cuando la Sociedad de las Naciones ya no

existe y ya no hay sistema de mandatos, se utiliza este sistema para ocultar la anexión *de facto* del Africa Sudoccidental. No creo que haya duda alguna con respecto a que ya se está efectuando esta anexión *de facto*, cualesquiera que sean las frases por las cuales se trata de disimularla.

¿Qué nos propone el Sr. Evatt? La capitulación pura y simple ante la Unión Sudafricana; la derogación de la decisión que la Asamblea tomó por unanimidad el año pasado. Parece que el Sr. Evatt opina que precisamente en esto consiste la defensa de los principios y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos otro nombre para esta proposición. Para nosotros constituye una violación flagrante de la Carta; demuestra un desprecio absoluto con respecto a las decisiones adoptadas; se reduce a una capitulación ante quienes no sólo se niegan a cumplir con las recomendaciones de la Asamblea sino hasta declaran, como lo hizo el año pasado el Mariscal Smuts, que "las relaciones entre el Africa Sudoccidental y la Unión Sudafricana han sido determinadas de una vez para siempre y sólo una guerra podría modificar esta situación". Por lo tanto, no es la Asamblea General la que formula un ultimátum a la Unión Sudafricana, como ha tratado de demostrarlo aquí el Sr. Evatt; al contrario, es el Gobierno de la Unión Sudafricana el que por medio del Mariscal Smuts envía un ultimátum a la Asamblea General; y el Sr. Evatt deseoso de ayudar al Mariscal Smuts, se esfuerza en proponer que la Asamblea General capitule incondicionalmente.

La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas insiste en la necesidad de aprobar una recomendación en la que se subraye que las Naciones Unidas continúan exigiendo que se ponga al Africa Sudoccidental en fideicomiso. Es preciso rechazar enérgicamente la proposición del Sr. Evatt encaminada a no adoptar una resolución en este sentido.

Ahora paso a la cuestión de las enmiendas introducidas al texto de la recomendación aprobado por la Cuarta Comisión. En cuanto a esto, se ha suscitado un debate sobre si es o no obligatorio colocar en fideicomiso los territorios antiguamente bajo mandato. Como es bien sabido, desde hace mucho tiempo se discute esto y todos quienes desean anexar territorios bajo mandato tratan de aprovecharse de cada coma de la Carta para demostrar que no existe ninguna obligación de colocar estos territorios bajo administración fiduciaria y que esta transferencia puede hacerse únicamente mediante un acto voluntario.

En esta etapa de los debates sobre la recomendación relativa al Africa Sudoccidental, la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no cree que deba entablar una discusión de orden jurídico. Estima que los argumentos según los cuales es obligatorio colocar en fideicomiso todos los territorios que anteriormente estuvieron bajo mandato, argumentos que fueron expuestos aquí por los representantes de Polonia y por otros varios representantes, son perfectamente válidos e irrefutables. Todo lo que puede agregarse es una observación muy sencilla: si se aprueba el punto de vista de quienes afirman que la Unión Sudafricana no está obligada a colocar al Africa Sudoccidental en fideicomiso, se debe también reconocer que todas las demás Potencias que anteriormente eran mandatarias tienen también el derecho de no tener en cuenta esta obligación.

Fácilmente pueden imaginarse lo que se produciría si todas las Potencias que anteriormente eran mandatarias hiciesen uso de este derecho, cosa que sería natural si realmente existiese este derecho. En ese caso el régimen internacional de administración fiduciaria y los Capítulos XII y XIII de la Carta de las Naciones Unidas serían completamente inútiles.

A juicio de la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no existe otra manera de resolver la cuestión que reconocer que la Carta estipula en términos perfectamente claros, que los territorios que anteriormente estuvieron bajo mandato deben ser obligatoriamente colocados bajo el régimen de administración fiduciaria. Por tal razón, la delegación de la URSS estima que el cuarto párrafo del preámbulo de la recomendación aprobada por la Cuarta Comisión tiene perfectamente en cuenta las consideraciones que acabo de exponer.

Durante el debate se suscitó una cuestión de procedimiento; se trataba de saber cuál es la mayoría necesaria para aprobar la recomendación relativa al Africa Sudoccidental. Algunos han afirmado que se necesita la mayoría de dos tercios para adoptar esta recomendación. Se ha citado el Artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, este Artículo no nos puede servir para demostrar la necesidad de una mayoría de dos tercios. Es verdad que entre las cuestiones consideradas como "importantes" el Artículo 18 menciona algunas cuestiones relativas a la administración fiduciaria. Pero ¿cuáles son estas cuestiones? El Artículo 18 enumera con precisión las cuestiones relativas a la administración fiduciaria que considera importantes. Estas son únicamente: la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Administración Fiduciaria y "las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria". Por consiguiente es del todo evidente que todas las demás cuestiones relacionadas con la administración fiduciaria, y no enumeradas en el Artículo 18, no son consideradas importantes en virtud de este Artículo y, por consiguiente, la mayoría de los dos tercios no es necesaria en este caso. Sólo nos queda decidir si una recomendación dirigida a un Miembro de las Naciones Unidas para que presente un proyecto de acuerdo de administración fiduciaria constituye una cuestión "relativa al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria". La respuesta a esta cuestión no puede ser más que negativa. En efecto, no se trata de examinar un acuerdo de administración fiduciaria que haya sido presentado, no se trata del funcionamiento de un acuerdo ya existente, no se trata tampoco de modificar tal acuerdo: únicamente se trata de pedir que se presente un acuerdo de administración fiduciaria. ¿Se puede en estas circunstancias exagerar tanto la interpretación jurídica y declarar que la regla de la mayoría de dos tercios enunciada en el Artículo 18 se aplica al caso presente? Debo agregar, además, que no se trata de aprobar una nueva recomendación sino de confirmar una recomendación que ya fué aprobada el año pasado.

Por todas estas razones, la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estima que el punto de vista de la delegación de la India se justifica plenamente, y por lo tanto apoya la proposición en virtud de la cual la recomendación relativa al Africa Sudoccidental debe ser aprobada

por una mayoría simple y no por una mayoría de dos tercios.

El Sr. Aranha deja la Presidencia y el Sr. McNeil le reemplaza.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante del Uruguay.

Sr. ARROSA (Uruguay): Sr. Presidente, respondiendo a algunas consideraciones hechas hoy por el Sr. Evatt, señalamos, en primer término, que nuestro pronunciamiento, tanto en la Comisión como aquí, no significa un ataque ni una censura a un determinado país, ni a una determinada personalidad a quien respetamos y admiramos: me refiero al Mariscal Smuts.

Pretendemos solamente, Sr. Presidente, que se cumplan las recomendaciones que por dos veces ha hecho la Asamblea General: en Londres, el 9 de febrero de 1946, y en Nueva York, el 14 de diciembre del mismo año; la primera vez, dirigiéndose a todos los Estados que administraban territorios bajo mandato; la segunda vez, al único Gobierno que no había cumplido con la invitación tendiente a que tales territorios fueran sometidos al régimen de administración fiduciaria.

A nuestro juicio, los pronunciamientos de la Asamblea son justos, están de acuerdo con la Carta y han debido ser cumplidos. Nos dice el Dr. Evatt que en San Francisco el pensamiento dominante fué el de que el régimen de mandatos no sería obligatoriamente sustituido por el de administración fiduciaria. Sin embargo, no todos piensan igual. En la Cuarta Comisión el Sr. representante de Francia manifestó que no era dudoso que los autores de la Carta no hayan tenido la intención de permitir que un territorio bajo mandato quedara fuera del régimen de administración fiduciaria.

No es el momento de entrar de nuevo ahora, en una discusión que tan detenidamente se llevó a cabo en la Cuarta Comisión. Para nosotros existe obligación legal de someterse al régimen de administración fiduciaria por parte de las Potencias Administradoras de territorios bajo mandato. No creemos que se trata de una cuestión facultativa, ni que solamente se trata de obligaciones puramente morales. Por el contrario, entendemos que el régimen de administración fiduciaria fué creado para sustituir al sistema de mandatos. Así lo consideró también la extinguida Sociedad de las Naciones el 12 de abril de 1946, y ello es lo que surge de los textos de la Carta.

El Artículo 77, en el inciso a, en su primer párrafo, determina que el régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios bajo mandato, y el Artículo 80, párrafo 2, es terminante, al declarar que lo establecido en el párrafo 1, no dará motivo para demorar y diferir la negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de administración fiduciaria a los territorios bajo mandato.

La Carta se ha referido por separado a los "territorios voluntariamente colocados bajo el régimen de administración fiduciaria por los Estados responsables de su administración", esto es, en el inciso c del párrafo 1 del Artículo 77; ahí se refiere al sometimiento voluntario, pero tal cosa no sucede cuando se ocupa de los territorios bajo mandato.

El acuerdo de administración fiduciaria debe ser presentado en los casos de mandatos, pudiendo

así, la Potencia interesada, discutir sus condiciones, sus términos, etc. Ese es el sentido que damos al párrafo 2 del Artículo 77.

Sostenemos una vez más, Sr. Presidente, que no es posible pensar en la continuación de un mandato, aunque se refiera sólo a su espíritu, cuando el mandante (Sociedad de las Naciones) ya no existe. La anomalía es evidente, el territorio en cuestión ni goza de independencia, ni es una colonia.

Ahora bien, en el régimen internacional vigente sólo se vislumbra dentro de la organización de territorios dependientes, los llamados "no autónomos" — Capítulo XI de la Carta — y los sometidos a la administración fiduciaria, Capítulos XII y XIII: no hay una tercera categoría o clase de territorios dependientes.

Además, aun en la duda sobre la vigencia o no vigencia de los preceptos de la Carta, nos inclinaremos por la interpretación favorable a su vigencia.

Expuesta sucintamente nuestra opinión, declaramos nuestro apoyo a las enmiendas propuestas por la representación de Dinamarca (documento A/429).

Confieso que no tengo ninguna discrepancia fundamental con los textos de la resolución propuesta por la Cuarta Comisión, pero nos decidimos por las enmiendas que ofrecen en forma más decorosa al Gobierno de la Unión Sudafricana una nueva oportunidad para reaccionar y presentar el acuerdo de administración fiduciaria relativo al Africa Sudoccidental. No somos partidarios, por lo general, de la fijación de términos conminatorios y no creemos que la fórmula de la enmienda traduzca una debilidad de parte de la Asamblea.

Por otra parte, nuestra delegación entiende que esta materia es "importante", y que además está vinculada con una cuestión, el régimen de administración fiduciaria, de las que expresa-mente la Carta especifica como tal. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 18, requerirá una votación a su favor de dos tercios y en este supuesto conceptuamos de buena y sana política inclinarnos a la solución que, respetando nuestro modo de pensar, ofrece fórmulas a las cuales todos o casi todos podrán prestarles su adhesión.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Siria.

Sr. ZEINEDDIN (Siria) (*traducido del inglés*): Esta cuestión del Africa Sudoccidental, fué objeto, durante el precedente período de sesiones de la Asamblea General, de un largo y minucioso examen, y las Naciones Unidas después de madura reflexión, aprobaron el 9 febrero de 1946 una resolución general que se extendía a la cuestión del Africa Sudoccidental, resolución fundada en el concepto de que es obligatorio colocar en fideicomiso los territorios anteriormente bajo mandato. Esta resolución declara o implica que fué tomado en aplicación de la Carta. Si se quiere aplicar la Carta, es preciso que ésta contenga una disposición en este sentido. El territorio del Africa Sudoccidental ha sido objeto, en particular, de la resolución del 14 de diciembre de 1946.

La situación actual es muy clara. Por una parte están estas resoluciones; por otra el hecho de que el Gobierno de la Unión Sudafricana persiste en que no está obligado a cumplir las disposiciones

de la Carta. El problema, por consiguiente, es el siguiente: o bien las Naciones Unidas se han equivocado al aprobar las dos resoluciones precedentes y deberían, en consecuencia, esforzarse en corregir su actitud, o bien la decisión de la Unión Sudafricana no se funda en la Carta y se deberá invitar a su Gobierno a que cumpla y observe las disposiciones de la Carta.

Naturalmente, cuando estas dos resoluciones fueron aprobadas, nadie, al menos que yo recuerde, declaró que la Unión Sudafricana no estaba de ninguna manera obligada a colocar al territorio del Africa Sudoccidental bajo el régimen de administración fiduciaria. En aquella época, en febrero de 1946, la Conferencia de San Francisco se consideraba como cosa reciente y habríamos podido recordarnos cuáles fueron, al respecto, las disposiciones de la Carta y su alcance real. La casi unanimidad de los Miembros favorecía entonces la tesis de la obligación, y, por consiguiente, del respeto de esta obligación.

Sin embargo, se ha observado que tal decisión puede crear muchas dificultades a la Unión Sudafricana. Podría ocasionar dificultades, pero podría sostenerse que la opinión pública de la Unión Sudafricana apoya a las Naciones Unidas y a la Carta en la medida en que, cuando se afirma que se ha tomado una decisión de acuerdo con la Carta, la opinión pública se sentirá satisfecha y tratará de cumplir dicha decisión. Pero, por razonable que sea querer evitar esta dificultad a la Unión Sudafricana, sería también igualmente razonable evitar la gran dificultad que tendrían las Naciones Unidas si se estimase que las resoluciones anteriores no se fundaban en ninguna obligación y habían sido aprobadas sin que existiese una base seria en la Carta o sin que existiesen disposiciones en este sentido.

Estimo que he tenido suerte al poder hablar en esta etapa del debate porque puedo eliminar explicaciones que ya fueron repetidas aquí con tanta elocuencia y claridad.

Sin embargo, únicamente quisiera manifestar, con respecto a las dos proposiciones que están ante la Asamblea General, la de la Comisión y la de Dinamarca, que ninguna puede tener razón de ser a menos que exista una obligación. Si no la hay, las Naciones Unidas no deben esforzarse en aprobar tales resoluciones.

En el pasado se juzgó que había una obligación; y la obligación impuesta por la Carta a nuestro juicio continúa existiendo como antes. Las Naciones Unidas deberían votar a favor de sus anteriores decisiones y pedir al Gobierno de la Unión Sudafricana que se conforme a dichas decisiones.

El plazo impuesto no constituye un ultimátum. El plazo, si se considera como debe considerarse, ofrece a la Unión Sudafricana un medio de salir de la dificultad en que nos encontramos.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Antes de conceder la palabra al siguiente orador inscrito, es decir el representante de Pakistán, el Sr. Aranha estima que para mayor comodidad de los representantes conviene hacer esta sugerencia. Naturalmente, está sujeta a la aprobación de la Asamblea General, aunque espero que contaremos con ella.

El Sr. Aranha propone que suspendamos la presente sesión a las 18.30 horas para cenar y que nos reunamos de nuevo a las 20.15 horas para

continuar la sesión hasta aproximadamente las 23 horas. Si para entonces no hemos agotado nuestro orden del día, lo que parece verosímil dado el ritmo de los debates, el Sr. Aranha propone que la Mesa se reúna mañana a las 15 horas en la Sala A y la Asamblea General, a las 16 horas, para terminar el debate sobre los restantes temas de nuestro programa.

Espero que los representantes convendrán en esto o al menos podrán aceptarlo.

Tiene ahora la palabra el representante del Pakistán.

Sr. PIRZADA (Pakistán) (*traducido del inglés*): Permítaseme manifestar con claridad, desde el comienzo, que apreciamos algunas de las medidas tomadas por el Gobierno de la Unión Sudafricana con respecto al territorio del Africa Sudoccidental. La primera medida que la Unión Sudafricana mencionó fué la de renunciar al derecho de anexión del territorio por parte del Gobierno de la Unión. También anunció, durante el debate, que aceptaba voluntariamente proporcionar al Secretario General, para que fuese considerada por las Naciones Unidas, la información que pide el inciso e del Artículo 73 de la Carta.

Apreciamos indudablemente estas medidas, pero ahora pedimos que la Unión vaya más lejos y coloque este territorio bajo el régimen internacional de administración fiduciaria de conformidad con el inciso c del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta. El verdadero problema no es el de saber si el Gobierno de la Unión Sudafricana está o no está obligado jurídica o moralmente a colocar el territorio bajo el régimen de administración fiduciaria; está en determinar si el hecho de colocar al territorio del Africa Sudoccidental bajo el régimen de administración fiduciaria convendría a los intereses de las poblaciones de este territorio.

Una simple comparación de los Artículos de los Capítulos XI y XII de la Carta que se relacionan con este problema muestra claramente las ventajas de un régimen con relación al otro. El primer punto que deseo subrayar es que, en virtud del sistema actual de mandatos, solamente un país es responsable de la buena administración del territorio y del desarrollo de las instituciones políticas o de otra naturaleza que existan en el mismo. Unicamente la conciencia de un solo Estado servirá constantemente de guía para que se respeten las disposiciones del Capítulo XI de la Carta. Por otra parte, si el territorio fuese colocado bajo el régimen internacional de administración fiduciaria, sería la conciencia de todas las Naciones Unidas la que, en el Consejo de Administración Fiduciaria, serviría de guía para administrar ese territorio, y habría por consiguiente, más probabilidades de que fuesen favorecidos los intereses de la población de dicho Territorio.

La segunda ventaja que, en virtud del Capítulo XI, ofrece el régimen de administración fiduciaria con relación a la administración ordinaria es que el régimen internacional de administración fiduciaria prevé un control internacional, de conformidad con el Artículo 75 de la Carta. Por el contrario, en el Capítulo XI de la Carta referente a la administración de los territorios no autónomos — categoría a la cual pertenecerá el Africa Sudoccidental de no ser colocada en fideicomiso — no existe ninguna disposición que prevea un control internacional; la única forma de control

consiste en proporcionar a las Naciones Unidas informaciones relativas a las cuestiones no políticas, es decir a las cuestiones económicas, sociales y de otra naturaleza. Esto no podría ser de gran ayuda mientras que el control internacional, como está considerado en el régimen de administración fiduciaria, presentaría indudablemente ventajas mucho mayores.

En tercer lugar, paso al punto más importante: la eliminación de los intereses particulares de cierta Potencia o de cierto Estado colonial. Como ya tuve ocasión de manifestarlo, toda Potencia colonial se preocupa naturalmente de sus propios intereses antes que de los intereses que administra, cosa que debe reconocerse. Esta es una actitud normal a la cual, en realidad, está vinculada la política colonial. Las Potencias se lanzan a la colonización con la idea del lucro. Por consiguiente si se coloca un territorio bajo el régimen de administración fiduciaria se evitará este inconveniente. El Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas se dejará guiar únicamente por los intereses de la población indígena.

Por consiguiente, el problema no se resuelve declarando que la Carta de las Naciones Unidas ha previsto dos procedimientos que permiten que un territorio obtenga su independencia: primero, el régimen internacional de administración fiduciaria previsto en el Capítulo XII, y segundo, la administración de los territorios no autónomos, como queda definido en el Capítulo XI. Tampoco es una solución sostener que el Territorio será administrado según el espíritu del mandato, porque esa categoría de régimen no está reconocida por la Carta de las Naciones Unidas. Según esta última, existen dos regímenes: la administración de los territorios no autónomos y la administración de los territorios en fideicomiso. Por consiguiente, se constituiría un tercer régimen: el de la administración en el espíritu de los mandatos; pero la Carta no lo reconoce y según parece lo ha abolido.

Existen otras consideraciones que obligan a la Unión Sudafricana a colocar este territorio bajo el régimen de administración fiduciaria. Primero, la Unión Sudafricana no tiene jurídicamente ningún derecho sobre este territorio y no ha hecho sino reconocer esta situación al no insistir en anexárselo. Segundo, en virtud del sistema de mandatos establecido por el Pacto de la Sociedad de las Naciones, la Potencia mandataria ejercía su mandato en nombre de la Sociedad de las Naciones y su administración estaba sometida al control de esta última. Estas disposiciones han sido incorporadas en el Artículo 75 de la Carta de las Naciones Unidas; al examinar este Artículo, así como el Capítulo XII, se comprueba que la Carta ha reconocido estos dos principios y que el régimen instituido por el Pacto de la Sociedad de las Naciones ha quedado mantenido en virtud de la Carta.

Al negarse a colocar este territorio en fideicomiso, la Unión Sudafricana viola los dos principios reconocidos en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que son: primero, la administración por un organismo internacional; segundo el control por un organismo internacional. Esto no es ni jurídico ni moral. Según el Pacto de la Sociedad de las Naciones tales eran las responsabilidades del Gobierno de la Unión Sudafricana; la Carta trata de prolongarlos, y no de modificarlos ni de disminuirlos. Por consiguiente, al ne-

garse a colocar el territorio bajo el régimen de administración fiduciaria la Unión Sudafricana se encontrará en una situación más ventajosa que la que resultaría para ella del sistema de mandatos de la Sociedad de las Naciones. Ese es un hecho que no puede justificarse.

Paso ahora a la situación jurídica, según la Carta. La resolución propuesta por la Cuarta Comisión no declara que la Unión Sudafricana esté jurídicamente obligada a colocar el territorio del África Sudoccidental bajo el régimen de administración fiduciaria. Simplemente dice, en el cuarto párrafo, que "*Considerando* que el fin manifiesto del Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas es que todos los territorios anteriormente bajo mandato sean colocados bajo el régimen internacional de administración fiduciaria hasta que se les conceda la autonomía o la independencia..." Agrego que, aunque en virtud del inciso c del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta, debe colocarse voluntariamente un territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, los Artículos precedentes del Capítulo XII dejan comprender claramente que sólo el régimen de administración fiduciaria puede reemplazar al sistema de los mandatos instituido por la Sociedad de las Naciones. Como ya he afirmado antes no ha sido prevista ninguna otra posibilidad por la Carta. Tal es, excluyendo cualquier otro, el sentido y el espíritu de la Carta.

La resolución considera definir claramente una situación que existe realmente y dar una interpretación de los propósitos y del espíritu que han animado a los autores de la Carta, pero no trata de crear de ninguna manera una obligación jurídica, como parece haberlo creído la Unión Sudafricana. Sin embargo, como dije anteriormente no es este el momento de ampararse tras objeciones jurídicas y de ir en contra de la opinión pública que indudablemente favorece la supresión del régimen colonial. Es hora de que las Potencias coloniales comprendan este hecho, y cuanto antes lo hagan será mejor.

En cuanto a la enmienda presentada por la delegación de Dinamarca, lamento decir que nos es difícil apoyarla. Opino, evidentemente, que no hay que emplear en la resolución términos que pudieran lastimar inútilmente al Gobierno de la Unión Sudafricana, pero no veo nada de ofensivo en el párrafo noveno de la resolución que la enmienda de Dinamarca se propone modificar. Si se compara la resolución actual con la que fue presentada originalmente, se comprobará que varias palabras y expresiones a cuyo empleo se opusieron ciertos representantes por otros motivos, fueron suprimidas o modificadas. A mi juicio, no hay en la resolución nada que pueda constituir una amenaza o un ultimátum, como parecen creerlo algunos representantes.

El Gobierno de la Unión Sudafricana, conforme a esta resolución, debe someter un proyecto de acuerdo de administración fiduciaria al examen de la Asamblea General. Esto es exactamente lo que sugiere la enmienda de Dinamarca. Sin embargo, ésta no hace sino debilitar los términos y facilitar las cosas de manera que el Gobierno de la Unión Sudafricana no tenga absolutamente en cuenta el año próximo la resolución de la Asamblea General, si tal es su deseo. No pretendo que sea eso lo que se propone hacer, pero sería más fácil desde el punto de vista moral, dada la redacción de la enmienda de Dinamarca, declarar el año próximo:

esto es lo que se nos ha pedido hacer, si lo podíamos hacer; pero encontramos que no es posible. Lo repito, sería más fácil para la Unión Sudafricana no tener en cuenta para nada la resolución, si tal fuese su deseo. Por consiguiente, prefiero que no se empleen estos términos. Y quisiera, sin modificar en nada la redacción de la resolución, que se pida a la Unión Sudafricana que cumpla antes del próximo período de sesiones los deseos de la Asamblea General.

Para concluir, deseo hacer algunas observaciones sobre la cuestión relativa a la mayoría de dos tercios. Ante todo, estimo que tenemos una resolución que únicamente repite las decisiones del año pasado. Aunque la cuestión en sí misma sea importante, el hecho de que la presente resolución la repita, la coloca entre las cuestiones importantes consideradas en el Artículo 18 de la Carta. Una vez más, todo depende de la interpretación de los términos de este artículo. La importancia de una cuestión está vinculada a los hechos de la cuestión en particular. Considerando los mismos hechos, hay quienes dirán que se trata de una cuestión importante, mientras que otros concluirán que no lo es.

En consecuencia estimo que lo mejor sería dejar a cada delegación el cuidado de evaluar la importancia de la cuestión; la decisión de la mayoría tendrá fuerza obligatoria.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Irak.

Sr. JAMALI (Irak) (*traducido del inglés*): Deseo expresar la opinión de mi delegación, que desea que el Territorio del Africa Sudoccidental sea colocado bajo el régimen de administración fiduciaria.

Los principios fundamentales de todo mandato son dos: el primero es que un territorio bajo mandato se confía a una Potencia mandataria, que debe asegurar el bienestar de sus habitantes y de encaminarlos hacia la autonomía. La Sociedad de las Naciones ejercía la soberanía sobre el territorio bajo mandato, en nombre de la población del propio Territorio hasta que éste fuese capaz de gobernarse por sí mismo. La Potencia mandataria no posee ningún derecho de soberanía sobre la población. En consecuencia, la Unión Sudafricana no tiene derecho de soberanía sobre el Africa Sudoccidental.

El segundo principio es que la Sociedad de las Naciones consideraba a la Potencia mandataria responsable de sus actos y de su administración del territorio bajo mandato.

Estoy seguro de que en el espíritu de este primer principio la Asamblea General se pronunció en contra de la anexión del territorio en cuestión por la Unión Sudafricana.

La Sociedad de las Naciones ya no existe, pero los principios fundamentales del mandato subsisten. Sin ninguna duda, el Capítulo XII de la Carta reemplaza al Artículo 22 del Pacto.

La Carta no obliga a ninguna Potencia mandataria a transferir un territorio bajo mandato a las Naciones Unidas a fin de que sea colocado bajo el régimen de administración fiduciaria. El Artículo 77 declara explícitamente que "1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de

los correspondientes acuerdos: a. Territorios actualmente bajo mandato..."

No se impone ninguna obligación, pero los Miembros de la Asamblea General que colaboraron en San Francisco en la redacción del Capítulo de la Carta consagrado a la administración fiduciaria se acordarán de que, aunque la Potencia mandataria no quedó obligada a colocar el territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, quedó sobrentendido que esta Potencia o colocaría al territorio bajo administración fiduciaria en el momento oportuno, o proclamaría su independencia.

Como ejemplo de este último caso se puede citar la decisión del Reino Unido con respecto al Reino de Transjordania. El Reino Unido proclamó la independencia de Transjordania. No hay otra posibilidad.

Que un territorio bajo mandato quede sometido al control de un solo Estado sin que intervenga un control internacional, es indudablemente incompatible con el espíritu y la letra del Pacto de la Sociedad de las Naciones así como con el de la Carta. La cuestión de la anexión del Africa Sudoccidental a la Unión Sudafricana fué suscitada en San Francisco. Fué rechazada.

En dos ocasiones anteriores la Asamblea General pidió al Gobierno de la Unión Sudafricana que presentara un acuerdo de administración fiduciaria. Hasta ahora el Gobierno de la Unión Sudafricana se ha negado a ello.

La resolución propone que la Cuarta Comisión no introduzca ningún elemento nuevo. No constituye sino una reiteración de las resoluciones precedentes. Espero firmemente que será aprobada por una mayoría abrumadora. Mi delegación formula esta declaración, porque está convencida de que nos mantenemos fieles al espíritu que en la Conferencia de San Francisco nos movió a redactar el párrafo b del Artículo 76, cuyo texto es el siguiente:

"Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta serán: ...promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideicometidos y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria..."

Estoy convencido de que se daría un paso atrás al no colocar el Territorio del Africa Sudoccidental en fideicomiso, sin concederle la independencia. Es una situación incompatible con el espíritu de la Carta; es una negación del derecho que tienen las Naciones Unidas para asegurar que los pueblos de todo el mundo disfruten de bienestar y de libertad.

Nuestro respeto por los pueblos llamados no autónomos e insuficientemente desarrollados es la prueba de nuestro valor moral y de nuestros sentimientos humanitarios.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de la India.

Rajá Sir Maharaj SINGH (India) (*traducido del inglés*): Esta mañana suscitó una cuestión de procedimiento, a saber, si la mayoría de dos

tercios era necesaria para la adopción de la resolución de la Cuarta Comisión. No se ha tomado ninguna decisión, pero espero que tendremos la ocasión de exponer lo que será nuestra actitud con respecto a nuestra resolución (que figura en el documento A/422) así como en lo que se refiere a la enmienda de Dinamarca. En efecto, como dije esta mañana atribuímos mucha importancia a la cuestión de si será necesario una mayoría de dos tercios o si bastará con una mayoría simple.

En cuanto a la cuestión de procedimiento, no puedo más que repetir lo que dije esta mañana. La resolución de la Cuarta Comisión no crea este año ninguna situación nueva. Como han indicado otros oradores, no constituye sino una simple reafirmación o repetición de la resolución del año pasado y de la invitación dirigida a todos los Estados administradores de territorios bajo mandato, en febrero de 1946. El cuarto párrafo de la resolución de la Cuarta Comisión comienza por las palabras "*Considerando* que el fin manifestado", ha sido objeto de muchos comentarios; especialmente se ha alegado que estas palabras implican una obligación jurídica. Creo que no es así. No se han empleado las palabras *obligación* ni *jurídica*.

¿Qué significan entonces estas palabras? Permítaseme leer el sexto párrafo de la resolución aprobada el 9 de febrero de 1946 cuyo texto es el siguiente: "La Asamblea General considera que cualquier atraso de la puesta en vigor del sistema internacional de fideicomiso, impide la implantación de los principios de tal sistema, como se estipula en la Carta y priva a los habitantes de los territorios que podrían ponerse bajo el sistema, de la oportunidad de gozar de las ventajas que resultarían de su aplicación".¹ No hay nadie entre nosotros, aunque sea el partidario más resuelto de la redacción más enérgica posible de una resolución, que desee ir más lejos de lo que la Asamblea General fué en febrero de 1946.

Eso es lo que nosotros entendemos por el cuarto párrafo del Preámbulo de la Carta. Sin embargo, dejemos, de un lado por una vez en la Asamblea General y en las Comisiones las obligaciones de orden jurídico; estoy casi tentado de decir las argucias jurídicas. La Carta se basa en altas consideraciones morales; sus primeras palabras no evocan obligaciones jurídicas, pues hablan de la elevación de los niveles de vida, de los derechos del hombre, de la igualdad de los hombres, de la dignidad de la persona humana y de la creación de las condiciones necesarias para el mantenimiento de la justicia y del respeto de las obligaciones nacidas de los tratados. Recuerdo haber oído al Sr. John Foster Dulles declarar en la Cuarta Comisión que las recomendaciones de las Naciones Unidas son la expresión de la conciencia moral del mundo. ¿Qué es el régimen de administración fiduciaria sino el guardián que la conciencia moral del mundo ha designado para vigilar varios territorios importantes?

Se nos ha dicho repetidas veces que colocar un territorio bajo administración fiduciaria es un acto puramente voluntario. Supongamos que ninguna nación, que ningún Estado administrador de territorios bajo mandato colocara a éstos en fidei-

comiso ¿qué sucedería entonces? El régimen de administración fiduciaria es un elemento esencial de la Carta de las Naciones Unidas y el Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano indispensable de la Organización. Me parece que este hecho por sí solo basta para impedir que un Estado que administra un territorio bajo mandato diga: "Nos negamos a colocar este territorio bajo administración fiduciaria" o en otras palabras "Nos negamos a reconocer un órgano esencial previsto por la Carta".

Me ha sorprendido oír al Sr. Evatt hablar de autonomía a propósito de la Unión Sudafricana. Recuerdo que declaró en la Cuarta Comisión que la Unión Sudafricana disfrutaba de un régimen democrático. He vivido en dicho país y sé que la declaración del Sr. Evatt, hecha sin duda con las mejores intenciones, es enteramente incorrecta. Allí no existe gobierno democrático. Hay un gobierno aristocrático del que yo no sabría decir si está enteramente basado en un privilegio de raza o de color puesto que, como señalé en diversas ocasiones el año pasado y este año, no hay un solo africano en todo el Parlamento de la Unión, que comprende de 200 a 300 miembros. En el Parlamento de la Unión Sudafricana no hay un solo africano ni una sola persona que no sea de origen europeo y el Parlamento del África Sudoccidental no contiene africanos. "Autonomía", "democracia" ¿se pueden emplear estas grandes palabras con respecto a un régimen que no reconoce ningún derecho político a la gran mayoría de los habitantes de este país?

El Sr. Evatt, así como uno o dos oradores más, ha hablado de progreso económico de la población indígena. No voy a contradecir este punto. Es exacto, si se toma como base las estadísticas de los 10 a 20 últimos años, que se han realizado diversos progresos; por ejemplo, en lo que concierne a la instrucción pública y a la higiene. Pero este progreso no compensa el hecho de que un gran número de habitantes no disfrutan ni de la libertad, ni de autonomía, ni de independencia. Después de todo, hay algo superior a los progresos económicos y eso es el sentimiento de ser un hombre libre en un país libre, independientemente de cualquier otra cuestión de raza o de religión. Nosotros en la India, que hemos estado mantenidos bajo tutela durante muchos años, sabemos bien, no obstante las dificultades que encontramos y las tragedias que ocurren tanto en la India como en el Pakistán, que la libertad se juzga en un plano completamente diferente al que se juzga al mejor de los Gobiernos. Recuerdo las palabras de un estadista británico que dijo: "Un buen Gobierno jamás podría reemplazar a la autonomía".

He observado que muchas Potencias Administradoras de territorios coloniales simpatizan con la Unión Sudafricana. No reprocho a la Unión Sudafricana de gozar de estas simpatías. Pero ¿pueden verdaderamente las Potencias coloniales, que gobiernan a un gran número de indígenas, expresar una opinión válida sobre este punto? Nosotros, por lo menos, que hemos conocido el dominio extranjero, y todos los que viven en Asia o en Africa y aun en muchos países de Europa simpatizamos con estos habitantes humildes de la Unión Sudafricana y del África Sudoccidental que se conocen con el nombre de africanos.

¹ Véanse las *Resoluciones adoptadas por la Asamblea General*, en la primera parte del primer período de sesiones, resolución 9 (I), página 13.

Se ha hablado de "opinión pública" a propósito de la cuestión de que nos ocupamos pero esta expresión se interpreta siempre en el significado de opinión de un grupo y este grupo es una minoría. No es esto lo que hay que entender por opinión pública. Desde la última vez en que tomé la palabra en la Asamblea General y en la Cuarta Comisión, he recibido, como sin duda han recibido muchos de Vds., peticiones enviadas por muchos africanos que viven en la Unión Sudafricana y aun en el Africa Sudoccidental, en la que declaran en los términos más claros que se oponen absolutamente a la decisión tomada por el Gobierno de la Unión Sudafricana con respecto al Africa Sudoccidental y que esperan fervientemente — temo que sea contra toda esperanza — que el Africa Sudoccidental sea colocada bajo el régimen de administración fiduciaria.

No he oído hablar de ningún organismo representativo de los africanos que viven en la Unión Sudafricana que haya apoyado la decisión tomada por el Gobierno de la Unión Sudafricana.

Aunque el representante de la Unión Sudafricana todavía no haya tomado la palabra, sabemos la respuesta que va a dar a nuestras repetidas solicitudes. Responderá con la negativa tanto con respecto a la resolución de la Cuarta Comisión como a la enmienda propuesta por el representante de Dinamarca. Sin embargo, se nos pide que redactemos nuestras invitaciones o nuestras peticiones en términos corteses por temor de herir la susceptibilidad de otro; se nos pide que empleemos términos estudiados, que a veces llegan a ser vagos y equívocos. De esta manera se espera que las Naciones Unidas logren calmar la susceptibilidad de nuestros amigos sudafricanos.

Permítaseme afirmar que esto no mejorará la situación; por mi parte, dudo mucho de que se nos presente un acuerdo de administración fiduciaria, ni en una fecha próxima como lo pide el representante de Dinamarca en su resolución primitiva, ni durante el tercer período de sesiones de la Asamblea General. Entonces la Asamblea General deberá tomar una decisión.

Durante todo este tiempo hemos estado discutiendo sobre la mayoría simple o la mayoría de dos tercios. No pensemos más en la mayoría de dos tercios; no pensemos más en la mayoría simple: el punto capital es que cualquier resolución que apruebe la Asamblea General no será aplicada. Aun más, diría que el deseo que hemos expresado de que el Gobierno de la Unión Sudafricana presente un informe al Consejo de Administración Fiduciaria para que formule recomendaciones será objeto de muchos comentarios. El Gobierno de la Unión Sudafricana no tiene ninguna fe en el Consejo de Administración Fiduciaria. No cree que el Consejo de Administración Fiduciaria o las Naciones Unidas deban examinar los informes. Según dicho Gobierno, el Africa Sudoccidental es y seguirá siendo un país *sui generis*.

Acualmente ¿cuántos países del mundo son países *sui generis*? Quisiera que uno de los representantes aquí presentes dijera si además del Africa Sudoccidental existen seis países *sui generis* o aun tres o siquiera dos.

¿Qué significa "país *sui generis*"? Para el Gobierno de la Unión Sudafricana significa un país que no es país metropolitano, que no está en fideicomiso y que no es una colonia. Se nos ha declarado que la situación del Africa Sudoccidental es

enteramente diferente de la de los otros territorios bajo mandato que han sido colocados bajo el régimen de administración fiduciaria. ¿Por qué? Porque está contiguo a la Unión Sudafricana, y es incapaz de gobernarse por sí mismo y de defenderse.

Habría podido presentarse argumentos semejantes con respecto a otros territorios que han sido ya colocados bajo el régimen de administración fiduciaria. Habría podido decirse que Samoa Occidental corre el peligro de ser atacada en el porvenir por algún enemigo. Lo mismo podría haberse dicho de Nueva Guinea. Sin embargo, las Potencias interesadas — lo que les honra — han respetado lo que constituye, a mi entender, las intenciones de la Carta y han actuado conforme al espíritu de este noble documento.

Sería mejor hacer caso omiso de la Carta que permitir que los Estados repitan cada año que no respetarán las recomendaciones de las Naciones Unidas o decir "cuando firmamos la Carta formulamos reservas". Si suponemos que cada Estado representado aquí ha formulado reservas ¿qué resultaría de ello? ¿Podrían aplicarse las disposiciones de la Carta? ¡No!

Concluiré declarando que es posible que Vds., señores representantes, y Vd. Sr. Presidente, continúen impotentes y sigan instando, pero yo no he perdido completamente la esperanza porque conozco estos países. Soy asiático. He vivido en Africa y sé lo que son las poblaciones africanas. Pueden llamarlas analfabetas — lo que no siempre ha sido culpa de ellas; pueden decir que son atrasadas, que carecen de instrucción; pueden dirigirles muchos reproches olvidando que nosotros tenemos muchas cosas que podrían condenarse. Fero el Africa Occidental, y el Africa Oriental, despiertan: he estado allí; el Africa del Sur también despierta lenta pero seguramente.

Hay en aquellas tierras una llaga abierta y en las condiciones actuales no se cerrará. La agitación crece en esos países y crecerá todavía más. A ustedes corresponde, únicamente a Vds., señores representantes — porque estos países tienen confianza en las Naciones Unidas y esta confianza todavía no ha sido puesta en duda — decir si quieren que se haga justicia o manifestar que son impotentes, que no pueden hacerlo y que deben abandonarlos a su destino.

Para terminar deseo agradecer a los representantes de Europa, de Asia y de Africa y finalmente, no menos importantes aunque citados en último lugar, a los representantes de América Latina que han manifestado en toda circunstancia su simpatía por la causa de los oprimidos.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de la Unión Sudafricana.

Sr. LAWRENCE (Unión Sudafricana) (*traducido del inglés*): He venido aquí esta tarde con la intención, que todavía tengo, de tomar la palabra sobre el fondo de la resolución de que se ocupa la Asamblea General. Sin embargo, uno de los varios representantes que han intervenido en estos debates en nombre del Gobierno de la India ha creído conveniente referirse durante las observaciones que acaba de formular, a la situación que reina en mi país. En realidad ha ido más lejos. Ha citado entre las comunidades que se suponen descontentas ciertas partes del continente africano.

Ignoro si estas observaciones estaban destinadas a ser amenazadoras. No tengo la intención de insistir en ellas porque no atañen a la Unión Sudafricana. Pero me preocupa todo lo que concierne a mi país y cuando un representante, sobre una cuestión que no interesa directamente a la administración interior de mi país, la Unión Sudafricana, trata de poner a mi país en la picota y hacer declaraciones cuya falsedad se puede demostrar, declaraciones tergiversadas que en ciertos casos son medio verdades y en otros menos que medio verdades, no estoy dispuesto a guardar silencio ante esta Asamblea mundial.

El representante de la India ha dicho que era absolutamente falso que la Unión Sudafricana disfrutara, como el Sr. Evatt declaró esta mañana, de un régimen democrático. Ha dicho que no había nada que se pudiera comparar a un Gobierno democrático en la Unión Sudafricana y ha continuado afirmando expresamente que nosotros admitimos y toleramos en nuestro país un régimen que pone fuera de ley y lo que él llama "la vasta mayoría" de la población.

Permítaseme citar algunos hechos y algunas cifras. Sé que esta cuestión emociona profundamente al representante de la India, pero yo también estoy muy emocionado cuando él ataca en esta tribuna el prestigio y la integridad de mi país.

Lamento mucho que se haya permitido esta ingerencia en los asuntos interiores de la Unión Sudafricana. Todos sabemos que en este momento hay entre el Gobierno de la India y el Gobierno de la Unión Sudafricana algunas cuestiones pendientes; es un hecho de lo más lamentable y de lo más molesto que no lamento menos que cualquier otro representante.

Hubiera creído que en estas condiciones convendría evitar, a ser posible, en el debate de la cuestión relativa al Africa Sudoccidental toda alusión que pudiera ser considerada o interpretada como un elemento de la tesis del Gobierno de la India contra la Unión Sudafricana. Pero después de haber oído al representante de la India, estoy obligado a manifestar lo siguiente: cuando recuerdo que el Gobierno de la India ha sido el primero en pedir este año que inscriba la cuestión en el programa de la Cuarta Comisión, que el representante de la India, que acaba de hablar, fué quien lanzó el primer ataque, un ataque violento contra mi país en la Cuarta Comisión; que el representante de la India fué quien hizo inscribir en su proyecto original presentado a la Cuarta Comisión una cláusula condenando a mi país; cuando tengo en cuenta el hecho de que cuando el representante de Australia subió a la tribuna y tuvo lo que algunos consideran la audacia de defender la Unión Sudafricana, el representante que acaba de tomar la palabra ha necesitado el apoyo y el refuerzo de el "comandante en jefe" de las fuerzas armadas de la India, digo que no se nos puede acusar, y que no se puede acusar a la opinión pública mundial, si concluimos que esta actitud persistente toma caracteres de *vendetta* de la India contra la Unión Sudafricana.

No estoy dispuesto a dejar estas afirmaciones sin respuesta. Mi colega dice que en la Unión Sudafricana existe una situación intolerable. Su población pertenece a muchas razas. Tenemos más o menos 250.000 indios; contamos además con 8.000.000 de lo que llamaremos indígenas, es decir, africanos, que en los Estados Unidos se

llaman negros. Contamos con aproximadamente 800.000 mestizos, y alrededor de 2.400.000 blancos.

Desde hace algún tiempo el Gobierno de la Unión Sudafricana ha tenido dificultades debido a que una corriente continua de africanos procedente del Continente ha pasado voluntaria e ilegalmente nuestra frontera del norte para venir a trabajar al país. Estos africanos que vienen a nuestro país no ignoran la situación existente en la Unión Sudafricana. Muchos de ellos han trabajado ya en él anteriormente, han ido a su país de vacaciones y en seguida han regresado a trabajar de nuevo a la Unión Sudafricana. Otros conocen de oídas las condiciones que reinan en las minas, en la industria o en cualquier otra parte de la Unión Sudafricana. Vienen a nuestro país voluntariamente.

Es indudablemente extraño que estos africanos vengan voluntariamente a un país que se califica ante los miembros de la Asamblea General como un país que trata a su población no europea de una manera humillante. Pero, permítaseme continuar. He dicho que hay en la Unión Sudafricana una población india. En virtud de los términos de un acuerdo concluido en el momento de la declaración firmada por el Gobierno de la Unión Sudafricana y el Gobierno de la India, conocido bajo el nombre de Acuerdo del Cabo en 1927, y en virtud de una declaración ulterior, de 1932, se dispone, y el Gobierno de la India lo aceptó, que se ofrecería pasaje gratuito a los indios de la Unión Sudafricana que desearan regresar a la India. El Gobierno de la Unión Sudafricana no solamente ofrece a estos indios su pasaje gratuito para que regresen a su país sino, además, les ofrece una prima generosamente fijada.

Quisiera preguntar al representante de la India ¿cuántos ciudadanos de su país han aprovechado hasta ahora esta disposición generosa? Y esta oferta sigue siendo válida en la actualidad.

Si mi país fuera bárbaro, poco civilizado, y tratase a su población no europea de una manera tan humillante ¿por qué entonces asistimos por una parte a esta infiltración ilegal y voluntaria a través de nuestra frontera del norte y, por otra parte, por qué los que viven en condiciones comparables a la de los ghettos no se van cuando se les da la posibilidad de hacerlo gratuitamente recibiendo además una prima generosa? ¿Por qué no aprovechan esta disposición? Además ¿por qué las gentes vienen a nuestro país? Porque nos hemos esforzado en asegurar un nivel de vida conveniente a todos los grupos de población.

Soy el último en pretender que en la Unión Sudafricana las condiciones sean perfectas; soy el último en pretender que sean ideales, pero hemos adoptado medidas de asistencia social, de enseñanza gratuita, etc., que se aplican a todos los grupos de la colectividad.

El representante que acaba de hablar manifestó que los no europeos no están representados en el Parlamento. Esto es verdad y lo confieso con toda franqueza ante la Asamblea General: actualmente, ninguna persona no europea puede representar directamente a un distrito electoral en el Parlamento. Es una cosa que se puede criticar; no quiero discutir este asunto. Pero si se tiene en cuenta la brevedad de la historia constitucional de mi país y la evolución de sus instituciones y sus usos políticos dentro de la estructura de una

comunidad de muchas razas, cuyos niveles de desarrollo varían, se puede ver como se presentan las cosas. Hay electores no europeos, hay electores de origen indio. En algunos consejos locales hay personas de origen indio y otras que no son europeas.

Durante los últimos años hemos hecho progresos considerables. Por esto puedo decir: aseguramos enseñanza obligatoria a los no europeos; concedemos pensiones de vejez a la población sin consideraciones de raza, de credo o de color, y esto sobre una base no contributiva; tenemos prestaciones de invalidez y pensiones para los ciegos; hemos establecido un programa de comidas escolares que se extiende a todas las partes de la comunidad; causa grandes gastos que son soportados principalmente por la parte europea de la población. Eso es lo que hacemos y cualquiera que sean las imperfecciones de nuestro régimen político, nuestra población, e incluyo a todas las secciones de la población, vive en paz y feliz.

Una de las libertades fundamentales es indudablemente el derecho de vivir. En mi país todos los elementos de la población tienen el derecho de vivir impunemente, en seguridad. Esto es algo que no existe desgraciadamente ahora en algunos países del mundo.

He creído necesario decir todo esto porque soy un ser humano y no quisiera perjudicar a ningún representante de ningún país, cualquiera que sea el grado de desacuerdo con ellos. Podemos estar en completo desacuerdo sobre ciertas cuestiones pero confiaba que pudiésemos discutir estos desacuerdos sin causar amargura, resentimiento y pena a la persona cuyo país se ataca. Resiento en nombre de mi país este ataque gratuito del representante de la India contra la Unión Sudafricana. Vds. me perdonarán si acaso me he visto obligado a pronunciar palabras un poco apasionadas.

Antes de hacer las declaraciones que me propongo formular sobre el fondo de la cuestión de que se ocupa la Asamblea General, me permitirá decir una palabra sobre la proposición encaminada a que el voto sobre la resolución no sea por una mayoría de dos tercios sino por simple mayoría. El representante de la India que acaba de hablar dijo que hemos gastado todo nuestro tiempo discutiendo sobre la conveniencia de una mayoría de dos tercios. Ha dicho: dejémos a un lado la mayoría de dos tercios. Pues bien, esta cuestión es importante o no lo es. Como dijo esta mañana el representante de los Estados Unidos de América, el Artículo 18 estipula con toda claridad que las decisiones de la Asamblea General sobre las cuestiones importantes deben ser tomadas por una mayoría de dos tercios. Repito, esta cuestión es importante o no lo es. Si no lo es ¿por qué ha sido necesario que dos representantes del Gobierno de la India vengan a la tribuna esta tarde para sostener su tesis? A mi juicio, es una cuestión importante y en estas condiciones es preciso que la Asamblea se pronuncie por una mayoría de dos tercios.

Permítaseme decir que hay algunos aspectos de la cuestión que aunque hayan sido estudiados muy de cerca y que a juicio de la delegación de la Unión Sudafricana sean claros e indiscutibles, han sido, sin embargo, generalmente mal comprendidos o ignorados hasta el punto que aun en esta hora tardía y con peligro de formular repeticiones monótonas, debo una vez más detenerme

en ellos. Espero que quienes no han apreciado todavía la importancia de los hechos simples en los cuales pienso, no los dejarán a un lado con impaciencia sino que los examinarán objetivamente y sin prejuicios. En este caso, estoy seguro de que por lo menos algunos de ellos, se verán obligados a admitir que la actitud de mi Gobierno se justifica, después de todo, en gran parte.

Es cierto que el Gobierno de la Unión Sudafricana debe responder a una acusación. Esta acusación es en esencia la siguiente: al no presentar un acuerdo de administración fiduciaria para el territorio del Africa Sudoccidental mi Gobierno ha faltado a una obligación moral, y según algunos a una obligación jurídica.

Esta pretendida obligación jurídica se derivaría del cuarto párrafo de la resolución propuesta por la Cuarta Comisión, resolución que no necesita leer de nuevo. Si esta afirmación fuese exacta, evidentemente podría sostenerse que el Gobierno de la Unión tenía la obligación jurídica de presentar un acuerdo de administración fiduciaria para el Africa Sudoccidental. Pero, a mi juicio, es indudable que esta afirmación es completamente inexacta. El Capítulo XII de la Carta no expresa ninguna intención de esta naturaleza. Como fué señalado en la Cuarta Comisión, los propios términos de este Capítulo tienen un carácter tan netamente facultativo que es difícil ver en qué podría fundarse una opinión contraria. El primer artículo de este Capítulo, el Artículo 75, que trata del establecimiento del régimen de administración fiduciaria, considera los territorios que podrán colocarse bajo este régimen en virtud de acuerdos particulares ulteriores. Las palabras "que puedan" que se utiliza en conjunción con la palabra "acuerdos" palabra que implica necesariamente la idea de un acto voluntario, es evidente e incontestablemente de carácter facultativo y no obligatorio. Lo mismo ocurre con respecto a la frase siguiente del Artículo 77 que tiene un alcance esencial: "El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen..." — se trata del régimen de administración fiduciaria — "...por medio de los correspondientes acuerdos". También aquí el texto tiene un sentido tan claramente facultativo que no hay controversia posible.

Esta interpretación se encuentra confirmada por el examen de las categorías de territorios enumerados en este Artículo. En lo que se refiere a dos de ellos, los territorios separados de los Estados enemigos y los territorios mencionados en el inciso c del párrafo 1, evidentemente no puede tratarse sino de una simple facultad. Es difícil comprender por qué razón debería considerarse la tercera categoría, y los territorios bajo mandato, que se rigen por la misma introducción y que aparecen exactamente en el mismo contexto, como una categoría para la cual existe una obligación, y si se tiene en cuenta el texto inequívoco del párrafo 2 del Artículo 77, esta dificultad es verdaderamente insuperable. El texto de este párrafo es el siguiente: "Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las categorías anteriormente mencionadas serán colocadas bajo el régimen de administración fiduciaria y en qué condiciones".

Sería difícil expresar en términos más claros y más precisos el carácter facultativo de los acuerdos relativos a todas estas categorías de territo-

rios. Ninguna deducción que pueda hacerse del empleo de la palabra "voluntariamente" del inciso c del párrafo 1 podría prevalecer contra esta disposición precisa del párrafo 2. Todo lo que podría deducirse de la interpretación del texto es que la palabra de que se trata ha sido empleada para mayor precisión y no para negar un carácter facultativo a los acuerdos que consideran las categorías mencionadas en los incisos a y b. Además, la deducción que se pretende sacar del párrafo 2 del Artículo 80 no anularía los términos muy explícitos del párrafo 2 del Artículo 77.

La disposición del párrafo 2 del Artículo 80, encaminado a evitar que sea demorada o diferida la negociación y celebración de acuerdos, se explica por la situación perturbada del mundo en la época en que la Carta fué redactada y no puede aplicarse sino en el caso en que el Estado interesado haya decidido ya presentar un acuerdo. No hay que perder de vista tampoco que esta disposición contra la demora o diferimiento se aplica a todos los territorios enumerados en el Artículo 77, así como a la categoría netamente facultativa del inciso c del párrafo 1 de este Artículo y no solamente a los territorios bajo mandato.

Esto basta para que sea absolutamente imposible sostener que el párrafo 2 del Artículo 80 implica la existencia de una obligación jurídica. Tal interpretación lo volvería completamente incompatible con el inciso c del párrafo 1 y significaría que todo Estado responsable de la administración de cualquier territorio que pertenezca a una cualquiera de las categorías mencionadas en el Artículo 77 (inclusive, especialmente, los territorios no autónomos) está obligado a presentar un acuerdo de administración fiduciaria. No vacilo en declarar que tal conclusión sería enteramente absurda y no podría aceptarse de ninguna manera.

La tesis que niega la existencia de una obligación jurídica está finalmente confirmada por los trabajos de San Francisco. Quisiera decir aquí, con todo el respeto debido, que el representante de Irak a mi juicio, ha comprendido mal o ha interpretado mal los debates de San Francisco. Como señaló en la Cuarta Comisión el representante del Canadá, el representante de Egipto propuso en San Francisco una enmienda encaminada a que todos los territorios bajo mandato fuesen colocados bajo el régimen de administración fiduciaria. Después de un debate completo, esta enmienda fué rechazada.

Además, el representante de los Estados Unidos de América nos dijo que el representante de su país en San Francisco se había esforzado, debido a la situación en las islas del Pacífico, por hacer que la colocación bajo fideicomiso no fuese obligatoria para todos los territorios bajo mandato, y que entonces se había admitido, en general, que las disposiciones de la Carta relativas al régimen de administración fiduciaria no estaban destinadas a imponer una obligación jurídica, como en realidad no imponen ninguna. Esta confirmación final de mi tesis por los debates y opiniones de quienes redactaron la Carta, apartan las últimas dudas que hubieran podido quedar sobre la cuestión de si existe o no una obligación de esta naturaleza.

En respuesta a todos estos argumentos, se ha sostenido repetidamente en la Cuarta Comisión que si no existiese obligación jurídica, la situación del territorio bajo mandato del África Sudoccidental no sería resuelta. Sin desear ofender a

nadie, observaré que esto es una exageración. Si se admite que a falta de un acuerdo de administración fiduciaria, no se aplicaría la Carta, esto no significa que la situación del territorio quedaría completamente indeterminada.

Examinemos los hechos. Aunque la Unión Sudafricana no ejerce una soberanía absoluta sobre este territorio, sin embargo, tiene derechos bien definidos al respecto. Tiene el derecho de legislar en lo que le concierne y de administrarlo como parte integrante de la Unión. Además, aunque por deferencia al deseo expresado por esta Asamblea, el Gobierno de la Unión Sudafricana haya renunciado a incorporar el territorio en cuestión, su política consiste siempre francamente en cumplir la misión que le fué confiada de favorecer en todo lo posible el bienestar material y moral y el progreso social de la población, y de administrar este territorio con el espíritu del mandato, hasta donde pueda hacerlo, ahora que la Sociedad de las Naciones ha dejado de existir. Además, el Gobierno de la Unión Sudafricana ha declarado que está dispuesto a presentar informes anuales, a título de información, a las Naciones Unidas. Todavía se mantiene este compromiso.

Aunque estos informes, de ser aceptados, deben ser remitidos a las Naciones Unidas a base de la idea de que ésta no es competente para controlar el territorio de que se trata, servirán, sin embargo, para mantener informada a la Organización de la misma manera que lo está con respecto a lo que sucede en los territorios no autónomos, de conformidad con el inciso e del Artículo 73 de la Carta. Por consiguiente, me permito afirmar que no es exacto pretender que la situación de este territorio quedará en suspenso. Será administrado según un régimen que puede considerarse ahora como un régimen *sui generis* pero que, a mi juicio, no es, sin embargo, incompatible con los objetivos de la Carta. Por consiguiente, quisiera insistir ante la Asamblea General en el hecho de que al adoptar un sistema de este género, el Gobierno de la Unión Sudafricana no ha recurrido a una forma de administración que pueda razonablemente considerarse como incompatible con los conceptos fundamentales de la comunidad de naciones.

La representación del territorio en el Parlamento de la Unión Sudafricana, a la que se ha prestado cierta atención en la Cuarta Comisión, no se apartará de esta forma de administración. En virtud del mandato, es indudable que esta representación habría podido concederse sin que se infringiera de ninguna manera las cláusulas del mandato. No es lo mismo que la incorporación, como lo han pretendido algunos representantes. Debido a esta representación el territorio no será incorporado a la Unión Sudafricana, así como los territorios colocados bajo la administración francesa no fueron incorporados a Francia cuando tuvieron representación en el Parlamento francés. Así pues, cuando esta representación haya sido acordada, el territorio continuará siendo administrado según el espíritu del mandato.

Paso ahora al problema de la obligación moral que según se pretende nos obliga. A juzgar por el preámbulo del proyecto de resolución hay otras razones en las cuales podría fundarse esta obligación. La primera es que todos los demás Estados que administran territorios anteriormente sometidos al sistema de mandatos, han colocado estos

rios. Ninguna deducción que pueda hacerse del empleo de la palabra "voluntariamente" del inciso c del párrafo 1 podría prevalecer contra esta disposición precisa del párrafo 2. Todo lo que podría deducirse de la interpretación del texto es que la palabra de que se trata ha sido empleada para mayor precisión y no para negar un carácter facultativo a los acuerdos que consideran las categorías mencionadas en los incisos a y b. Además, la deducción que se pretende sacar del párrafo 2 del Artículo 80 no anularía los términos muy explícitos del párrafo 2 del Artículo 77.

La disposición del párrafo 2 del Artículo 80, encaminado a evitar que sea demorada o diferida la negociación y celebración de acuerdos, se explica por la situación perturbada del mundo en la época en que la Carta fué redactada y no puede aplicarse sino en el caso en que el Estado interesado haya decidido ya presentar un acuerdo. No hay que perder de vista tampoco que esta disposición contra la demora o diferimiento se aplica a todos los territorios enumerados en el Artículo 77, así como a la categoría netamente facultativa del inciso c del párrafo 1 de este Artículo y no solamente a los territorios bajo mandato.

Esto basta para que sea absolutamente imposible sostener que el párrafo 2 del Artículo 80 implica la existencia de una obligación jurídica. Tal interpretación lo volvería completamente incompatible con el inciso c del párrafo 1 y significaría que todo Estado responsable de la administración de cualquier territorio que pertenezca a una cualquiera de las categorías mencionadas en el Artículo 77 (inclusive, especialmente, los territorios no autónomos) está obligado a presentar un acuerdo de administración fiduciaria. No vacilo en declarar que tal conclusión sería enteramente absurda y no podría aceptarse de ninguna manera.

La tesis que niega la existencia de una obligación jurídica está finalmente confirmada por los trabajos de San Francisco. Quisiera decir aquí, con todo el respeto debido, que el representante de Irak a mi juicio, ha comprendido mal o ha interpretado mal los debates de San Francisco. Como señaló en la Cuarta Comisión el representante del Canadá, el representante de Egipto propuso en San Francisco una enmienda encaminada a que todos los territorios bajo mandato fuesen colocados bajo el régimen de administración fiduciaria. Después de un debate completo, esta enmienda fué rechazada.

Además, el representante de los Estados Unidos de América nos dijo que el representante de su país en San Francisco se había esforzado, debido a la situación en las islas del Pacífico, por hacer que la colocación bajo fideicomiso no fuese obligatoria para todos los territorios bajo mandato, y que entonces se había admitido, en general, que las disposiciones de la Carta relativas al régimen de administración fiduciaria no estaban destinadas a imponer una obligación jurídica, como en realidad no imponen ninguna. Esta confirmación final de mi tesis por los debates y opiniones de quienes redactaron la Carta, apartan las últimas dudas que hubieran podido quedar sobre la cuestión de si existe o no una obligación de esta naturaleza.

En respuesta a todos estos argumentos, se ha sostenido repetidamente en la Cuarta Comisión que si no existiese obligación jurídica, la situación del territorio bajo mandato del África Sudoccidental no sería resuelta. Sin desear ofender a

nadie, observaré que esto es una exageración. Si se admite que a falta de un acuerdo de administración fiduciaria, no se aplicaría la Carta, esto no significa que la situación del territorio quedaría completamente indeterminada.

Examinemos los hechos. Aunque la Unión Sudafricana no ejerce una soberanía absoluta sobre este territorio, sin embargo, tiene derechos bien definidos al respecto. Tiene el derecho de legislar en lo que le concierne y de administrarlo como parte integrante de la Unión. Además, aunque por deferencia al deseo expresado por esta Asamblea, el Gobierno de la Unión Sudafricana haya renunciado a incorporar el territorio en cuestión, su política consiste siempre francamente en cumplir la misión que le fué confiada de favorecer en todo lo posible el bienestar material y moral y el progreso social de la población, y de administrar este territorio con el espíritu del mandato, hasta donde pueda hacerlo, ahora que la Sociedad de las Naciones ha dejado de existir. Además, el Gobierno de la Unión Sudafricana ha declarado que está dispuesto a presentar informes anuales, a título de información, a las Naciones Unidas. Todavía se mantiene este compromiso.

Aunque estos informes, de ser aceptados, deben ser remitidos a las Naciones Unidas a base de la idea de que ésta no es competente para controlar el territorio de que se trata, servirán, sin embargo, para mantener informada a la Organización de la misma manera que lo está con respecto a lo que sucede en los territorios no autónomos, de conformidad con el inciso e del Artículo 73 de la Carta. Por consiguiente, me permito afirmar que no es exacto pretender que la situación de este territorio quedará en suspenso. Será administrado según un régimen que puede considerarse ahora como un régimen *sui generis* pero que, a mi juicio, no es, sin embargo, incompatible con los objetivos de la Carta. Por consiguiente, quisiera insistir ante la Asamblea General en el hecho de que al adoptar un sistema de este género, el Gobierno de la Unión Sudafricana no ha recurrido a una forma de administración que pueda razonablemente considerarse como incompatible con los conceptos fundamentales de la comunidad de naciones.

La representación del territorio en el Parlamento de la Unión Sudafricana, a la que se ha prestado cierta atención en la Cuarta Comisión, no se apartará de esta forma de administración. En virtud del mandato, es indudable que esta representación habría podido concederse sin que se infringiera de ninguna manera las cláusulas del mandato. No es lo mismo que la incorporación, como lo han pretendido algunos representantes. Debido a esta representación el territorio no será incorporado a la Unión Sudafricana, así como los territorios colocados bajo la administración francesa no fueron incorporados a Francia cuando tuvieron representación en el Parlamento francés. Así pues, cuando esta representación haya sido acordada, el territorio continuará siendo administrado según el espíritu del mandato.

Paso ahora al problema de la obligación moral que según se pretende nos obliga. A juzgar por el preámbulo del proyecto de resolución hay otras razones en las cuales podría fundarse esta obligación. La primera es que todos los demás Estados que administran territorios anteriormente sometidos al sistema de mandatos, han colocado estos

territorios bajo el régimen de administración fiduciaria, o les han concedido la independencia; como segunda razón, se insiste en las resoluciones aprobadas el 9 de febrero y el 14 de diciembre de 1946 por esta Asamblea.

Es verdad que todos los demás Estados interesados han presentado acuerdos o han concedido la independencia a los territorios bajo mandato, y es evidente que el Gobierno de la Unión Sudafricana no podría ser considerado como obligado moralmente únicamente a menos que la situación del territorio bajo mandato del Africa Sudoccidental difiera sensiblemente de la de los otros territorios que estaban anteriormente colocados bajo el mismo régimen. Mi Gobierno ha tenido más de una vez ocasión de señalar las diferencias de hecho considerables que existen entre la situación del Africa Sudoccidental y la de otros territorios. Los miembros de la Asamblea me permitirán recordar una vez más estas diferencias.

Ante todo, el Africa Sudoccidental entra en la categoría "C" de mandatos, o sea la de los territorios que deben ser administrados como parte integrante de los Estados que están encargados de ellos y para los cuales el Pacto y los autores del Pacto no consideraron en lo porvenir otro destino que su integración al Estado encargado de administrarlos, como parte autónoma de este Estado. Este sólo hecho basta para diferenciar netamente este territorio de la mayoría de los demás.

En segundo lugar, existen otras diferencias más características que colocan a este territorio en una situación absolutamente única entre los territorios bajo mandato. El Africa Sudoccidental está contigua a la Unión Sudafricana y no está separada de ella por ninguna frontera natural. Esto es cierto hasta tal grado que en dos ocasiones la existencia nacional de la Unión ha sido amenazada por ataques procedentes de este territorio. Desde el punto de vista etnológico, existen vínculos entre toda su población, y la de la Unión Sudafricana. Desde el punto de vista administrativo, la incorporación de este territorio a la Unión Sudafricana ha alcanzado tal grado que un control internacional no solamente afectaría los asuntos puramente internos de este territorio sino también los de la Unión Sudafricana. Creo justificado recordar esto, dadas ciertas observaciones hechas ahora. En cuanto a cuestiones como las aduaneras, las contribuciones indirectas, los ferrocarriles, los correos, la inmigración, la policía, la defensa, los mercados, el control de los precios y la distribución de ciertos productos esenciales, el Africa Sudoccidental está estrechamente vinculada con la Unión Sudafricana. Además, en el caso de este territorio y de este territorio únicamente, la mayoría de los habitantes se ha declarado en contra del acuerdo de administración fiduciaria.

Es verdad que esta Asamblea ha estimado que la población indígena del Africa Sudoccidental no ha llegado todavía a un grado de desarrollo que le permita expresar una opinión. No hay que olvidar, sin embargo, que la población de este territorio cuenta también con europeos, y que estos últimos también tienen el derecho de expresar su opinión. Su punto de vista es igualmente muy claro y cualquiera que sea el estado de desarrollo de la población indígena, mi Gobierno no está dispuesto a admitir que se deba desatender completamente la opinión de la población indígena con

respecto a esta o a cualquier otra cuestión que afecte su interés actual o futuro.

Se ha declarado hoy que la inmensa mayoría de los habitantes, cientos de miles de africanos del Africa Sudoccidental, se opone al sistema actual. Esto no es cierto. Hay africanos de la tribu de los Hereros, 10.000 en un total de 300.000, que se han pronunciado contra la incorporación y contra el sistema actual, pero no hemos ocultado este hecho a la Asamblea General. Siempre hemos dado a conocer que esta débil minoría se opone a la incorporación y al mantenimiento del sistema del mandato. No tener en cuenta la opinión claramente expresada a la vez por los europeos y por los indígenas sería incompatible con la misión que el Gobierno de la Unión Sudafricana ha asumido en virtud del mandato.

Este solo hecho, en mi humilde opinión, debería hacer justicia a la pretendida obligación moral que, como podría decirse, se deriva de las medidas tomadas por otras Potencias mandatarias. Pero hay algo más aun. Sólo en lo que concierne a este territorio se ha formulado una reserva precisa. Fué hecha en San Francisco antes de la firma de la Carta y también durante el primer período de sesiones de la Asamblea General celebrado en Londres. Se ha pretendido que toda clase de personas habrían podido formular reservas, pero no se puede negar el hecho de que esto fué expresado con conocimiento de todas las partes. Es verdad que esta reserva no figura en la Carta, después de la firma dada a nombre del Gobierno de la Unión Sudafricana. La razón de ello es muy sencilla. No era necesario formular esta reserva en esta forma porque la Carta no impone manifestamente ninguna obligación de proceder, con respecto a este territorio, en otra forma que presentando el acuerdo de administración fiduciaria exclusiva de cualquier otra solución. Sin embargo, mi Gobierno juzgó oportuno, a fin de evitar toda mala interpretación ulterior, precisar claramente su actitud con respecto a este territorio. Lo ha hecho de la única manera correcta y apropiada, es decir, en forma de una declaración oficial que remitió a San Francisco como documento de la Conferencia.

Es verdad que, cuando el representante de la Unión Sudafricana leyó dicho documento ante la Comisión que se ocupaba de las disposiciones de la Carta relativas al régimen de administración fiduciaria, el Presidente de la Comisión declaró que no podría ser admitido, pero únicamente porque podía considerarse como encaminado a que la Comisión emitiera un juicio o tomara medidas relativas al porvenir del territorio en cuestión, y no porque no fuese sino una simple ilustración de las dificultades suscitadas por la administración de los territorios bajo mandato de la categoría "C". Se declaró que no podía ser admitido, como acabo de decir, debido a que se refería al destino de un territorio particular, mientras que la Comisión no se ocupaba de territorios particulares sino de los principios generales del régimen de administración fiduciaria. Pero esto no puede cambiar en nada el hecho indiscutible de que este documento fué remitido a la Secretaría como documento de la Conferencia y que como tal fué distribuido y puesto en conocimiento de los representantes de los demás Estados.

A falta de una obligación jurídica derivada de la Carta, eso era todo lo necesario. Hemos decla-

rado abiertamente nuestras intenciones, a diferencia de muchos otros Estados que sin ninguna otra formalidad se han anexionado vastos territorios que comprenden millones de habitantes. Nosotros no hemos considerado tomar ninguna medida sino hasta después de consultar a los habitantes de este territorio y de que las Naciones Unidas examinasen la cuestión.

Después de la declaración que hicimos y repetimos durante el primer período de sesiones de la Asamblea General en Londres, ¿cómo es posible sostener ahora que el hecho de que las otras Potencias mandatarias hayan presentado proyectos de acuerdo de administración fiduciaria obligue moralmente al Gobierno de la Unión Sudafricana a hacer lo mismo? Al formular esta reserva, mi Gobierno precisó con anticipación que existían condiciones particulares muy precisas que colocaban al África Sudoccidental fuera de la categoría general de los territorios bajo mandato. Después de haber actuado así, no puede admitirse que exista una obligación moral de ninguna naturaleza por analogía con las medidas tomadas para otros territorios bajo mandato que se encuentran en una situación completamente diferente.

Por estas razones mi Gobierno está convencido de que el hecho de que otras Potencias mandatarias hayan presentado acuerdos de administración fiduciaria no crea en nada para él la obligación moral de presentar un acuerdo de esta naturaleza para el África Sudoccidental. Estas razones justifican al mismo tiempo la tesis según la cual se deriva una obligación directa del espíritu de la Carta, tan a menudo invocada. En su espíritu, la Carta no nos obliga, a mi juicio, a considerar sin ningún valor los derechos jurídicos que los Estados derivan del derecho internacional; no dije tampoco que un Estado debe abandonar toda misión que le incumba en virtud de un mandato para encargarse de otra misión de carácter diferente, y esto en contra de los deseos de quienes están más interesados, es decir, de la población del territorio que administra. Por consiguiente, estimo que antes de haberse aprobado la resolución que he mencionado, mi Gobierno no tenía ninguna obligación moral de concluir un acuerdo de administración fiduciaria.

¿Cómo entonces, debemos preguntarnos, han modificado estas resoluciones la situación? Mi delegación estima que de lo dicho parece concluirse que estas resoluciones han sido aprobadas para asegurar el respeto, por parte del Gobierno de la Unión Sudafricana, de obligaciones jurídicas o morales existentes. Cuando fueron aprobadas no existía ninguna obligación absolutamente, ni jurídica ni moral: conviene no olvidarlo cuando se calculen los efectos de estas resoluciones. Además, la primera resolución aprobada en febrero de 1946 sólo se proponía invitar a las Potencias mandatarias a presentar acuerdos. Esto es importante. ¿Ha creado esta invitación una obligación moral que no existía anteriormente? En este caso la palabra "invitación" parece haber perdido su significado. Resultaría que al no aceptar una invitación de la Asamblea General se incurriría en una culpabilidad moral. Una invitación no sería considerada como tal, sino como un precepto de código moral con lo que se atribuiría un sentido indudablemente demasiado elevado a lo que la propia Asamblea ha llamado una invitación y nada más.

Llegó ahora a la resolución de diciembre de 1946, que constituye claramente más que una invitación: contiene una recomendación. Y esto nos conduce ahora a la cuestión importante de saber en qué medida las recomendaciones de la Asamblea General tienen carácter obligatorio para los Estados Miembros. No quisiera que se pudiesen interpretar equivocadamente los deseos de mi Gobierno sobre esta cuestión.

El representante de México ha citado algunas de mis observaciones ante la Cuarta Comisión y las ha citado correctamente. Puede haber interpretado o comprendido mal lo que yo me he esforzado en decir. Quisiera que nuestro punto de vista quedase en claro.

Todos estamos de acuerdo, me permito creerlo, con respecto al hecho de que estas recomendaciones, las de la Asamblea, no tienen el mismo carácter obligatorio que un artículo de derecho internacional. Esta Asamblea no es un cuerpo legislativo y sus recomendaciones no pueden crear obligaciones jurídicas cuando antes no existían. No pueden, además, a mi entender, servir para crear preceptos obligatorios de moral internacional. Aunque esta Asamblea, de tiempo en tiempo, pueda expresar las convicciones morales corrientes del mundo en materia internacional no puede prescribir de una manera absoluta lo que debe ser aprobado como moralmente bueno y lo que debe condenarse como moralmente malo. En otras palabras, me permito decir que una recomendación, como la propia palabra indica, no es una orden expresa obligatoria y rígida en materia jurídica o moral.

Pero no quiero insinuar que una recomendación no origine ninguna obligación. Estoy dispuesto a reconocer que entraña una obligación, pero estimo que esta obligación consiste en que cada Estado a quien se dirija una recomendación tiene el deber de considerarla seriamente y con buena fe y de aplicarla si existe para ello alguna posibilidad, y no eludirla fundándose en motivos manifiestamente insuficientes o frívolos.

Mi Gobierno ha cumplido conscientemente con este deber. Ha examinado con el mayor cuidado la recomendación de diciembre de 1946. La ha aplicado en la medida que las circunstancias lo han permitido. Quisiera saber si esto ha sido suficientemente apreciado por algunas delegaciones. En deferencia al deseo expresado por la Asamblea General y con el asentimiento del Parlamento de la Unión Sudafricana, ha decidido no incorporar este territorio. Sin embargo, por las razones que he recordado, mi Gobierno, así como el Parlamento de la Unión, estima imposible ir más lejos. Es posible que Vds. no estén de acuerdo con mi Gobierno al respecto, pero estimo con toda sinceridad que no pueden descartar todas estas razones so pretexto de que no tienen valor o importancia; y me parece que Vds. no pueden, con justicia, acusar a mi Gobierno de haber tomado una actitud de desafío.

En estas condiciones mi delegación no puede apoyar la resolución ni en el texto propuesto por la Comisión, ni tan siquiera en su forma enmendada. Me he esforzado en conservar siempre una actitud coherente con respecto a esta cuestión. Mi delegación no puede aceptar, con enmiendas o sin ellas, una resolución en la cual se pide o insta al Gobierno de la Unión que haga lo que,

después de un detenido examen de la situación, se encuentra, a conciencia, imposibilitado de hacer.

Permítaseme concluir por donde he comenzado, dirigiendo un llamamiento a los representantes para que examinen una vez más los hechos y los argumentos que he presentado. Estoy convencido que de esta manera podrán todavía llegar a la conclusión de que desde el punto de vista jurídico o moral no hay ninguna necesidad de poner una vez más al Gobierno de la Unión Sudafricana frente a una resolución redactada en términos cada vez más apremiantes, resolución que no podría aplicar no porque no desee cooperar lo más posible con los otros Miembros de las Naciones Unidas, sino porque se encuentra en la imposibilidad de hacerlo debido a los hechos establecidos y a las circunstancias en las cuales se plantea el problema.

Les dirijo ahora este llamamiento en nombre de mi país que, como ha subrayado el Sr. Evatt, ha contribuido mucho a la existencia de las Naciones Unidas. Nuestro papel aunque pequeño lo hemos desempeñado. Por otra parte, no fué un papel completamente secundario el que desempeñamos en la lucha contra las fuerzas del fascismo y del nazismo. Mi jefe el Mariscal Smuts, ha podido cooperar con la experiencia de toda su vida de estadista en la creación de esta nueva Organización en la cual el mundo entero concentra ansiosamente sus esperanzas. Si mis colegas, aun no comprometidos por declaraciones formales, quieren recordar estos antecedentes, estoy seguro de que no tendré necesidad de prometerles que sería absolutamente incompatible con las tradiciones y deseos de la Unión Sudafricana hacer a propósito e imprudentemente algo que pueda de alguna manera ir en contra de los principios de la Carta.

Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento a los representantes que han comprendido nuestras dificultades y no han querido insistir para que una censura o crítica de otra naturaleza haga más difícil la tarea de un Estado, que no tiene deseos más fervientes que ser un Miembro leal de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tengo algunas dudas con respecto a lo que debemos hacer. Se sugirió que la Asamblea discutiera el procedimiento que se pudiera seguir en la votación. Sin poner formalmente esta cuestión a votación podría tener una indicación de lo que los representantes desean hacer. ¿Quieren pronunciarse ahora sobre el procedimiento de votación o desean que se discuta esto a las 20.15? Los que quieran llegar ahora a una decisión con respecto al procedimiento de votación que levanten las manos.

Indudablemente los representantes desean terminar ahora con esta cuestión. Cincuenta y un votos se han pronunciado en este sentido.

El problema consiste en determinar si la cuestión que discutimos debe ser o no aprobada por la mayoría de dos tercios. La mayoría de los miembros decidirá si es o no necesaria una mayoría de dos tercios.

Tiene la palabra el representante de Irak.

Sr. JAMALI (Irak) (*traducido del iralés*): Se trata de una cuestión muy delicada y en verdad muy importante. Normalmente, la decisión debería tomarse por mayoría de dos tercios. Sin embargo, no es la primera vez que examinamos

esta cuestión y no vamos a tomar una decisión nueva. Simplemente vamos a confirmar una decisión anterior, exactamente como se hace cuando se recuerda una carta enviando otra.

En estas condiciones la mayoría de dos tercios no es indispensable y a juicio de mi delegación, y de otras delegaciones, bastaría con una simple mayoría para confirmar nuestra decisión anterior.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Australia.

Sr. EVATT (Australia) (*traducido del inglés*): Según la Carta, el Presidente debe decir si se trata de una cuestión importante. Esta decisión no debe ponerse a votación. Las decisiones sobre cuestiones importantes deben ser tomadas por mayoría de dos tercios de los miembros pudiéndose, por simple mayoría, agregar algo a la enumeración que figura en el Artículo 18, pero no quitar nada con la misma mayoría. El Artículo pertinente de la Carta es muy claro al respecto.

Estoy de acuerdo con el representante del Irak en considerar que, desde cierto punto de vista, confirmamos la recomendación del año pasado. Sin embargo, esto no aumenta ni disminuye la importancia de la cuestión. La prueba de que es importante es que ha sido presentada por segunda vez.

Estimo que corresponde al Presidente decidir. Creo que según la Carta debe hacerlo. Si su decisión es mala, podemos expresar una opinión contraria. El procedimiento que debe seguirse es el siguiente: el Presidente de la Asamblea General debe decidir si la cuestión es importante o no y si su decisión suscita objeciones podrá ser revocada.

No puedo imaginar una cuestión más importante que una que implique un voto de censura contra la conducta de uno de los Miembros de las Naciones Unidas. No será la última vez que nos encontramos en presencia de tal problema. Otras situaciones análogas surgirán tal vez durante la Asamblea General cuando posiblemente tengamos que pronunciarnos sobre la conducta de un Miembro determinado, como vamos a hacerlo ahora con la Unión Sudafricana. Ustedes pueden estar o no de acuerdo sobre la condena, aunque implícita, contenida en la resolución, pero ¿no se trata de una cuestión importante? ¿Hay alguien entre los representantes que haya tomado la palabra ahora que la considere sin importancia? No se trata de saber si este asunto se refiere o no al régimen de administración fiduciaria. Al mencionar el régimen de administración fiduciaria el Artículo 18 indica simplemente que el hecho de que una cuestión entre en la categoría de régimen de administración fiduciaria, marca de por sí la importancia de esta cuestión.

A mi juicio, esta cuestión es importante no solamente por sí misma sino a causa de la resolución. En efecto, en ella se señala que un Miembro de las Naciones Unidas no ha aplicado una recomendación de la Asamblea General, indica que debe cumplir con tal recomendación, y establece una ley respecto a una obligación moral.

Durante el debate se ha sostenido que todo Miembro tiene el deber de colocar bajo el régimen de administración fiduciaria los territorios bajo mandato.

No puedo concebir cuestión más importante que esa. Estimo que el Presidente debe decidir; si su decisión da lugar a objeciones, estas deberán,

según nuestro reglamento, ser formuladas inmediatamente y entonces la Asamblea decidirá si la decisión debe ser rechazada.

Estimo que según la Carta la situación es ésta: el Presidente debe decidir sobre la importancia de una cuestión; corresponde a la Asamblea General, si así lo desea, agregar la cuestión, por simple mayoría de votos, a la lista de las cuestiones consideradas como importantes por el Artículo 18. Pero ninguna decisión tomada por simple mayoría puede restar importancia a una cuestión que es importante.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Francia.

Sr. MAYER (Francia) (*traducido del francés*): La cuestión que nos ha sido presentada está determinada en términos generales por el Artículo 18 de la Carta.

No me detendré en dilucidar si la resolución que nos ha sido propuesta, por no ser en algunas de sus partes, como se ha dicho, sino una renovación de una resolución anterior, debe ser puesta a votación siguiendo uno u otro procedimiento, porque, como acaba de observar el Dr. Evatt, si no me equivoco, se trata de saber si la cuestión debe o no requerir una determinada mayoría.

Según el Artículo 18 este asunto se puede considerar desde dos puntos de vista, para decidir la cuestión.

Que la cuestión sea importante, por la extensión de los debates que ha originado, por la calidad de los oradores que han participado y por sus consecuencias, que son extensas, nadie puede ponerlo en duda y debería llevar a la aplicación del párrafo 3 del Artículo 18.

Pero quisiera señalarles un hecho. Esta resolución, por lo menos en algunas de sus disposiciones, cae indudablemente dentro del párrafo 2 de este mismo Artículo, que requiere la mayoría de dos tercios para las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria.

En su discurso, que hemos oído con mucho interés, el representante de la República de Haití ha explicado que esta enumeración debe considerarse como limitativa, puesto que se trata de una excepción al derecho. Quisiera estar de acuerdo con él, pero me permito observar que para ser una enumeración limitativa, es singularmente larga, puesto que el último asunto considerado en el párrafo 2 se refiere a las cuestiones presupuestarias. Y todos saben que como cuestiones presupuestarias se puede considerar tanto el voto emitido sobre el propio presupuesto como las consecuencias presupuestarias de una resolución particular.

Es evidente que si el inciso tuviera un alcance verdaderamente limitativo, no terminaría por la mención de un tema tan extenso.

¿Cuáles son, por consiguiente, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria?

Al parecer de la delegación francesa, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria son las que figuran en los capítulos XII y XIII de la Carta. Además, ya lo hemos comprobado con respecto a la aprobación de un acuerdo de administración fiduciaria sometido para el territorio de Nauru. Este acuerdo

debía ser aprobado, como lo fué por una mayoría de dos tercios. Ahora se trata de saber si debe proponerse un acuerdo para un territorio determinado. Se ha visto que es una cuestión por lo menos tan importante como las modalidades del acuerdo, cuando sea propuesto.

Por consiguiente, me parece evidente que la cuestión sometida ante nosotros requiere la mayoría de dos tercios.

Finalmente, en el proyecto de resolución que se nos ha propuesto (documento A/422) figuran instrucciones que serán dadas por la Asamblea al Consejo de Administración Fiduciaria:

"Autoriza, — dice la resolución — al Consejo de Administración Fiduciaria a estudiar el informe relativo al Africa Sudoccidental sometido por el Gobierno de la Unión Sudafricana y a presentar sus observaciones al respecto a la Asamblea General."

Sugiero y mantengo que cualquiera que sea la interpretación que se dé a las palabras "cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria", este párrafo de la resolución propuesta afecta al propio Consejo de Administración Fiduciaria, al que da competencia en un caso particular y, por consiguiente, caemos indudablemente dentro del alcance del párrafo 2 del Artículo 18, que para la resolución propuesta exige el voto de una mayoría de dos tercios.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Me encuentro en una situación muy difícil. Preferiría que la Asamblea General solucionara la cuestión. Pero no quisiera crear un precedente que pudiera tener repercusiones graves.

La Secretaría me ha señalado a la atención el hecho de que el Sr. Aranha había prometido que buscaría y comprobaría lo que dijo anteriormente sobre esta cuestión.

El acta en francés y el acta en inglés no concuerdan en lo que declaró el Sr. Spaak, Presidente del primer período de sesiones de la Asamblea. A la hora de almuerzo se tomó del archivo el registro sonoro de lo que dijo, y se ha tomado nota de ello.

En la última Asamblea, el 14 de diciembre (mi traducción será acaso un tanto libre, pero aseguro que es mejor que mi francés) el Sr. Spaak declaró: "Señores, creo que es prudente solucionar esta cuestión" (la cuestión que discutimos en este momento) "por una votación nominal, y que todos estamos de acuerdo en que esta resolución exige una mayoría de dos tercios".

Por lo tanto me parece que debo adoptar el método que nos ha propuesto el Sr. Evatt fundándose en el precedente establecido por el Sr. Paul Spaak durante el último período de sesiones de la Asamblea General; por consiguiente, opino que esta resolución necesita, por ser aprobada, una mayoría de dos tercios.

Tiene la palabra el representante de Filipinas.

Sr. CABILI (Filipinas) (*traducido del inglés*): Lamento estar en desacuerdo con el Presidente en cuanto a la decisión que acaba de tomar.

En primer lugar, el Sr. Aranha ya había decidido que se dejaría a la Asamblea el cuidado de determinar si la resolución debía ser aprobada por la mayoría de dos tercios o por simple mayoría. La decisión del Presidente interino está, por

consiguiente, en contradicción con la del Sr. Aranha.

El representante de Australia ha propuesto que el Presidente solucione la cuestión y que los representantes decidan si están o no satisfechos con esta decisión. Esta es una maniobra que tiende a eludir y frustrar el deseo de algunos representantes que quieren que la cuestión sea solucionada por simple mayoría, porque para apelar de la decisión del Presidente, si no estoy equivocado, es necesario obtener una mayoría de dos tercios.

Para proceder regularmente habría sido necesario que el representante de Australia apelase de la decisión del Sr. Aranha, quien ya había decidido que la cuestión sería resuelta por la Asamblea General.

Con todo el respeto que debo a la decisión que acaba de tomar el Presidente le pido, por consiguiente, considere si debe modificarla por respeto a la decisión ya tomada por el Presidente permanente, quien declaró que convenía dejar a los miembros de la Asamblea el cuidado de decidir si el voto debía ser por mayoría de dos tercios o por simple mayoría.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de Filipinas tiene el derecho, lo reconozco plenamente, para apelar contra mi decisión. En todo caso habría actuado como lo he hecho. Ya he explicado que la situación es muy delicada. Sin embargo, no podemos continuar discutiendo indefinidamente esta cuestión.

Según el artículo 68 del Reglamento declaro que por haber suscitado el representante de Filipinas objeciones contra mi decisión o la interpretación que he dado, propongo que se ponga mi interpretación a votación.

Tiene la palabra el representante de Pakistán.

Sir ZAFRULLAH Khan (Pakistán) (*traducido del inglés*): Debemos aclarar una cuestión de derecho. ¿Ha declarado el Presidente permanente que la cuestión debe ser resuelta por la Asamblea? Si no lo ha declarado nos encontramos ante una decisión del Presidente actual; esta decisión es la que es válida si no es debidamente objetada y anulada. Al contrario, si el Presidente permanente ha hecho la declaración que se le atribuye, la cuestión ha quedado ya solucionada y Vd. no tiene necesidad Sr. Presidente, de tomar una nueva decisión.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Ya señalé que estoy en una situación muy difícil pero nadie puede dirigir los debates de una sesión tratando de asegurar lo que el anterior Presidente quería hacer. El representante de Filipinas ha presentado objeciones contra mi decisión. Deseo aclarar que de ninguna manera protesto de ello. Pero propongo, conforme al artículo 68, que se ponga a votación su objeción.

Tiene la palabra el representante del Irán para una cuestión de orden.

Sr. ENTEZAM (Irán) (*traducido del francés*): Pido la palabra para una cuestión de orden. Sr. Presidente, si Vd. plantea la cuestión en esta forma, creo que la mayor parte de las delegaciones estarán en una situación muy delicada porque ninguna desea votar contra la decisión que Vd. ha tomado. Pero, como hemos discutido esta cuestión, es decir, si es necesario tener una

mayoría de dos tercios o una mayoría simple, Vd. puede plantear la cuestión a la Asamblea de esta manera: ¿Aprueba la Asamblea la mayoría de dos tercios o la mayoría simple? Hay precedentes sobre este punto y precisamente en una cuestión que concierne a la Unión Sudafricana.

Con motivo de la controversia entre el Gobierno de la India y el de la Unión Sudafricana el año pasado, se suscitó la cuestión de si era necesario tener una mayoría simple o una mayoría de dos tercios. El Presidente en aquella ocasión consultó a la Asamblea y la Asamblea decidió.

Por consiguiente, pido Sr. Presidente que no presente la cuestión de determinar si la Asamblea está de acuerdo o no con la decisión de Vd., porque lo repito, no nos gustaría votar en contra. Sería preferible que preguntara a la Asamblea si opinaba que era necesario votar por esta cuestión por una mayoría de dos tercios o por simple mayoría.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Argentina.

Sr. ARCE (Argentina): Señor Presidente, señores representantes, el señor representante de Irán acaba de recordar un hecho que es exacto, y al cual yo deseo referirme para demostrar que en esta oportunidad la resolución debe ser tomada por dos tercios de votos.

Ese hecho ocurrió en la Asamblea del año anterior, cuando se discutió aquí a propósito de la cuestión relativa a los indios que viven en la Unión Sudafricana y ciertas disposiciones adoptadas por el Gobierno de aquel país.

En esa oportunidad¹ yo subí a la tribuna y pedí a la Asamblea que sostuviese que debía ser resuelta la cuestión por dos tercios de votos, en virtud de las razones que en ese momento dí, y que debieron ser buenas, porque algunos de los señores representantes — y voy a hacer honor a la rectitud de una delegación en especial, la del Uruguay, que en el fondo de la cuestión votaba en contra de mi tesis — sostuvieron que yo tenía razón cuando pedía que la resolución debía ser tomada por dos tercios de votos. Se votó después; mi resolución triunfó; como consecuencia la Asamblea se pronunció por los dos tercios de votos y, en la cuestión de fondo, yo fui derrotado.

¿Cuáles son los motivos por los cuales es ineludible que en esta oportunidad la cuestión sea resuelta por dos tercios de votos? Primero, porque así lo dice la Carta. ¿Y a qué me voy a poner a demostrar lo que se demuestra leyendo la Carta y lo que han dicho muchos oradores aquí? Pero sí quiero hacer notar un argumento que ha sido hecho ya dos o tres veces y que ha estado a punto de traerme hasta aquí, como en definitiva me ha traído: pero si ya el año pasado hemos resuelto esto, ¿cómo se van a necesitar dos tercios de votos? Y entonces me ocurrió que si este año lo resolvemos por simple mayoría, y hay que resolverlo el año que viene otra vez, puede llegar el momento en que la Asamblea por un voto resuelva mantener la resolución a que nos estamos refiriendo.

Si la resolución fué suficientemente importante el año anterior para tomarla por dos tercios de votos, sigue siendo importante este año, lo seguirá

¹ Véanse los Documentos Oficiales de la segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, sesiones plenarias.

siendo por los siglos de los siglos, hasta el día del Juicio Final por la tarde. Porque no es nuestra voluntad ni los votos de ninguna de las delegaciones lo que va a cambiar la sustancia o la materia del asunto que estamos discutiendo.

¿Por qué es que se debe votar por dos tercios? Porque la Carta lo dice; porque, además de que la Carta lo diga, en lo que se refiere al Consejo de Administración Fiduciaria, la Carta dice cuándo es una materia importante. Lo acaba de demostrar, con esa claridad y con esa precisión con que el genio francés suele definir y suele exponer las cuestiones, el señor representante de Francia. También lo dice el Artículo 18.

Pero es que este asunto compromete dos cosas, que están por encima de la voluntad de esta Asamblea: compromete las cuestiones internas de los Estados. Y vuelvo a repetirlo este año: mientras yo tenga asiento en la Asamblea, nunca se ha de votar ninguna resolución más o menos a la ligera y por simple mayoría de votos, sobre materias que los Estados no hayamos delegado a las Naciones Unidas, y las cuestiones domésticas de nuestros países que no estén específicamente establecidas en la Carta, no han sido delegadas, no entran en la jurisdicción de esta Asamblea, y como consecuencia, sobre ellas no debe pronunciarse.

Pero es natural que se me pueda contestar: es que tenemos la duda de si se trata una cuestión doméstica o no doméstica, tenemos la duda de que usted no nos cite, con precisión y con justeza, el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. Muy bien, eso puede ocurrir, unos podemos tener una opinión, y otros, otra.

¿Es o no es una cuestión importante saber si una resolución viola o no viola la Carta? ¡Pero si es de la mayor importancia posible! Luego, es evidente que por ese motivo es necesario votar por los dos tercios.

Pero, además, esto implica una censura contra uno de los países que forman parte de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas no se han formado para hacer la guerra ni para censurar a los países, ni para discutir aquí inútilmente, días y horas enteras, ni para repetir discursos, uno tras de otros, que dicen exactamente las mismas cosas; las Naciones Unidas se han fundado para asegurar la paz del mundo, no para hacer la guerra, y no para censurar a las propias Naciones Unidas.

Por estos motivos, señor Presidente, yo creo que el señor Presidente ha decretado bien que debemos votar por dos tercios. Y si yo me atreví a pedir la palabra, a pesar de lo que dice el artículo 68 del reglamento es porque al honorable representante de Filipinas le fué concedida la palabra y habló en contra de la Presidencia; me parecía que, por lo menos, un miembro de esta Asamblea podía venir hasta aquí para hablar en favor de la Presidencia.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Deseo que continúe el debate y también ser justo. Tengo varios oradores en la lista. Ahora concederé el uso de la palabra a un representante que quiera hablar a favor de la moción del representante de Filipinas, es decir en contra de la decisión del Presidente. Después de oír a dos oradores de cada lado pasaremos a la votación.

Sr. CABILI (Filipinas) (*hablando desde su sitio*) (*traducido del inglés*): Deseo suscitar una cuestión de orden.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Estamos discutiendo la cuestión de orden ya suscitada por el representante de Filipinas.

Sr. CABILI (Filipinas) (*hablando desde su sitio*) (*traducido del inglés*): Suscito una cuestión de orden que tiene prioridad y tengo el derecho de que se me oiga.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Filipinas.

Sr. CABILI (Filipinas) (*traducido del inglés*): He suscitado una cuestión de orden porque con todo el respeto que debo al Presidente interino tengo la impresión de que no me ha comprendido completamente. No he pedido a los representantes que revoquen la decisión del Presidente interino. No he presentado una moción formal en ese sentido. Simplemente he pedido al Presidente interino que abandone su decisión concerniente al voto de la mayoría de dos tercios, puesto que el Presidente permanente ya expresó la opinión de que la Asamblea General debe decidir si la cuestión será solucionada por mayoría de dos tercios o por simple mayoría.

Como no he apelado de la decisión del Presidente no hay lugar de proceder, como quiere hacerlo, a una votación respecto a esta decisión. Repito, Sr. Presidente, que no tengo la intención de apelar en contra de su decisión. Me dirijo simplemente a su buen juicio de imparcialidad y de justicia.

Lo que yo he querido manifestar es que antes de ceder la presidencia al Presidente interino, el Presidente permanente de la Asamblea General declaró que incumbía a esta Asamblea decidir si la proposición sería aprobada por mayoría de dos tercios de votos.

La decisión del Presidente es ahora enteramente diferente de la de nuestro Presidente permanente. La solicitud que dirijo ahora al Presidente se refiere a la presente decisión tomada por el Presidente interino, decisión contraria a la tomada por el Presidente permanente. Repito que no quiero apelar de la decisión del Presidente interino. Protesto porque el Presidente permanente ya ha declarado que correspondía a la Asamblea General decidir si el voto sería por mayoría de dos tercios o por simple mayoría.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Discutimos una moción de orden. Tiene la palabra el representante de la India.

Sr. SETALVAD (India) (*traducido del inglés*): Mi delegación considera que la situación es muy clara: la primera vez que el problema fué presentado ante la Asamblea General, un miembro de mi delegación suscitó una cuestión de orden. El Presidente declaró en la Asamblea General en aquella ocasión, y más de una vez si mal no recuerdo, que la cuestión podía discutirse pero que la Asamblea General decidiría por sí misma, cuando los oradores hubieran terminado sus intervenciones sobre la moción de fondo, sobre si el voto sería por mayoría de dos tercios o por simple mayoría.

Creemos que el Presidente ha decidido que se había suscitado una cuestión de orden contra la decisión tomada por él. No queda sino aplicar esta decisión y poner la proposición a votación.

Se trata de saber si la mayoría simple basta o si es necesario una mayoría de dos tercios. Me parece, por consiguiente, que la situación es la siguiente: El Presidente ya ha tomado una decisión que exige que la cuestión sea resuelta por un voto de la Asamblea. Esta cuestión consiste en saber si la decisión se tomará por el voto de una mayoría de dos tercios o por simple mayoría.

Si al contrario, se considera que no existe ninguna decisión de esa naturaleza, aunque yo creo que todo el mundo estima, como yo, que ha sido tomada, en este caso, correspondería al Presidente decidir si la cuestión exige la mayoría de dos tercios. En ese caso, la decisión del Presidente deberá ser objeto de una apelación, en conformidad con el artículo 68. Habrá que escoger entre las dos hipótesis. En consecuencia, ahora deberemos proceder a la votación. Este es el deseo de mi delegación.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): El representante de la India ha aclarado la cuestión. Como lo ha indicado, debémos votar de una manera o de otra y lo haremos conforme al artículo 68.

Tiene la palabra el representante del Pakistán.

Sr. ZAFRULLAH Khan (Pakistán) (*traducido del inglés*): Temo mucho que la cuestión no se ha aclarado mucho desde que fué suscitada por el representante de Filipinas. Se trata en primer lugar de solucionar una cuestión de hecho. Antes de que se pueda pasar a la votación, cualquiera que fuere, debemos establecer si el Presidente decidió que la cuestión debería ser resuelta por la Asamblea. Si el Presidente decidió que este asunto sería resuelto por la Asamblea, entonces, el asunto está resuelto, puesto que ya se tomó una decisión al respecto; no hay lugar para que se tome otra decisión.

La primera cuestión que se debe resolver es si el Presidente ha dejado o no a la Asamblea General en libertad para decidir si es necesaria una mayoría de dos tercios. El Presidente actual no ha dicho una palabra sobre esta cuestión y quisiera pedirle que declarara formalmente si el Presidente permanente tomó o no tomó una decisión sobre esta materia. Entonces podremos terminar con ese primer punto. Si el Presidente interino declara que el Presidente permanente no había dejado el asunto a la decisión de la Asamblea General, su decisión actual sólo puede objetarse según el procedimiento normal.

Queda todavía la cuestión suscitada por el representante de Filipinas y discutida también por el representante de la India: ha decidido o no decidido el Presidente que la cuestión, después de discutida, sería resuelta por la Asamblea General. Si lo hizo, no se necesita ninguna nueva decisión por parte del Presidente y la última decisión debe abandonarse.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Debo precisar que la única razón por la cual no procedemos a la votación, y eso que eso es lo que pide el representante de Pakistán, es que los representantes desean tomar la palabra al respecto.

Tiene la palabra el representante de los Estados Unidos de América.

Sr. DULLES (Estados Unidos de América) (*traducido del inglés*): He entendido que Vd. ha decidido ya que se necesita una mayoría de dos tercios. El artículo 68 permite apelar de su decisión y me parece que es lo que ha ocurrido. El

artículo 68 estipula también que toda apelación debe ponerse inmediatamente a votación. Sin embargo, ha transcurrido ya media hora y, aun para una organización internacional, esto no quiere decir inmediatamente. Pido que la cuestión se ponga inmediatamente a votación de conformidad con el artículo 80. Pido que la votación sea nominal porque estimo que es importante saber quiénes son los que consideran que esta cuestión es importante y quiénes opinan lo contrario.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Espero que nuestro colega no estime que haya procedido incorrectamente con él. Hay dos maneras de votar sobre la cuestión. La primera consiste en interpretar lo que el Presidente dijo esta mañana. La otra, en tomar una decisión y dejar que la Asamblea General se pronuncie sobre esta decisión. Se trata de una cuestión importante que a juicio de la Presidencia exige la mayoría de dos tercios. Quienes comparten mi opinión deben responder sí y los que opinan lo contrario que digan no. Los representantes tendrán como de costumbre el derecho de abstenerse.

Sr. JAMALI (Irak) (*hablando desde su sitio*) (*traducido del inglés*): ¿Sobre qué votaremos?

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Votaremos sobre la interpretación de la presidencia, a saber, de que el tema que discutimos es una cuestión importante. Quienes consideren que es una cuestión importante, que exige una mayoría de dos tercios, dirán "sí" y quienes opinan lo contrario dirán "no".

Sr. JAMALI (Irak) (*hablando desde su sitio*) (*traducido del inglés*): ¿Votaremos sobre la decisión del Presidente o sobre el fondo? Las dos cosas son diferentes. Si el voto se refiere a la decisión de la presidencia no votaré en contra. Pero si se me pide que exprese mi opinión sobre el fondo, la cuestión es diferente.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Temo que no podamos votar de esta manera. Pido que consideren esto como una cuestión de fondo. Además, no interpretaré de ninguna manera el resultado de la votación como una crítica contra la presidencia. Se trata de una simple cuestión de procedimiento para poder proceder a la votación. Espero que todo el mundo estudie el asunto. Los que opinen que se trata de una cuestión de fondo que exige una mayoría de dos tercios responderán "sí", y quienes opinen lo contrario dirán "no".

Se procede a votación nominal, con el resultado siguiente:

Votos a favor: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Francia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Perú, Suecia, Turquía, Unión Sudafricana, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela.

Votos en contra: República Socialista Soviética de Bielorrusia, China, Checoslovaquia, Etiopía, Guatemala, Haití, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Pakistán, Filipinas, Polonia, Arabia Saudita, Siam, Siria, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia.

Abstenciones: Afganistán, Cuba, Honduras, México, Panamá.

Ausente: Yemen.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): La proposición encaminada a establecer si se trata de una cuestión de fondo que exige la mayoría de los dos tercios ha sido aprobada por 31 votos contra 20, y 5 abstenciones.

Creo que ahora debemos proceder a la votación sobre la cuestión de fondo. Pero, según nuestro reglamento, ante todo debemos pronunciarnos sobre la enmienda presentada por la delegación de Dinamarca.

Tiene la palabra el representante de la India para hablar sobre una cuestión de orden.

Rajá Sir Maharaj SINGH (India) (*traducido del inglés*): El Presidente se acordará que dije hoy que mi delegación no podría decidir si votaba a favor de la enmienda de Dinamarca o a favor de la resolución de la Cuarta Comisión antes de haberse decidido si esta resolución o esta enmienda exigía la mayoría de dos tercios. Ahora que se aclaró que es necesaria una mayoría de dos tercios, simplemente deseo manifestar que la delegación de la India, aunque desde el principio haya preferido su propio texto a la enmienda de Dinamarca, o a la resolución de Dinamarca como lo fué originalmente, votará ahora a favor de la enmienda de Dinamarca.

La razón es muy sencilla: La Asamblea ha decidido que se necesita una mayoría de dos tercios de los votos. Consideraremos que es extremadamente conveniente, acaso esencial, aprobar por lo menos una resolución que confirme las recomendaciones precedentes e invite encarecidamente al Gobierno de la Unión Sudafricana a que prepare y presente un acuerdo de administración fiduciaria. Naturalmente, lamento que actúemos así, pero la necesidad no conoce ley y dadas las circunstancias la delegación de la India votará a favor de la enmienda de Dinamarca. De lo contrario, no habría ninguna resolución lo que, a nuestro juicio, sería poco deseable.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Considero que la Asamblea General desea aceptar la proposición que acaba de formular el representante de la India, a saber que la resolución modificada por la enmienda de Dinamarca constituye la resolución puesta a votación. En ese caso propongo que procedamos a la votación sobre la resolución modificada por la enmienda de Dinamarca tal como figura en el documento A/429.

Sin embargo, antes de proceder a la votación tiene la palabra el representante de la Unión Sudafricana.

Sr. LAWRENCE (Unión Sudafricana) (*traducido del inglés*): Deseo aclarar completamente la actitud de mi delegación. No estoy influenciado en esta cuestión de la votación por consideraciones de oportunismo. La manera en que votaré no dependerá de ninguna decisión anterior. A mi juicio, se trata de una cuestión de principio; en cuanto a los principios que sostiene mi Gobierno, no cambiarán por un voto anterior particular.

En nombre de mi Gobierno he mantenido una actitud lógica. Esta actitud consiste en no aceptar ninguna proposición encaminada a pedir o a recomendar a mi Gobierno que presente un acuerdo de administración fiduciaria.

Para conservar esta actitud lógica mi delegación necesariamente debe votar en contra de la enmienda de Dinamarca. Si lo hacemos, no es porque deseemos que la enmienda de Dinamarca sea rechazada con relación a la propia proposición, ni que no apreciemos el espíritu que anima a esta enmienda. Pero no podemos votar a favor de ningún texto que forme parte de una recomendación de la Cuarta Comisión en la que se nos pide que presentemos un acuerdo. Por esto deseo que votemos separadamente sobre la enmienda de Dinamarca.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Dije que si la Asamblea General estaba de acuerdo, pondríamos a votación la resolución modificada por la enmienda de Dinamarca.

Ahora creo comprender que el representante de la Unión Sudafricana desea que la resolución no sea enmendada. En estas condiciones debemos votar primero sobre la enmienda de Dinamarca. Si ésta se aprueba, pondremos a votación la resolución enmendada. Si ésta se rechaza, pondremos a votación la resolución en su forma original.

Se ha pedido que la votación sea nominal.

Sr. MAKIN (Australia) (*hablando desde su sitio*) (*traducido del inglés*): No pido que la votación sea nominal para la enmienda de Dinamarca. Sin embargo, sí lo deseo en cuanto a la cuestión de fondo.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Votaremos sobre la enmienda de Dinamarca, tal como figura en el documento A/429.

Se procede a votación nominal, con el resultado siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Brasil, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Etiopía, Francia, Guatemala, Haití, Islandia, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, México, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Siam, Suecia, Siria, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia.

Votos en contra: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Polonia, Turquía, Unión Sudafricana.

Abstenciones: República Socialista Soviética de Bielorrusia, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, República Dominicana, El Salvador, Grecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Paraguay y Reino Unido.

Ausente: Honduras.

Por 36 votos contra 9 y 11 abstenciones queda aprobada la enmienda.

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Pasaremos ahora a la votación nominal de la resolución que figura al final del informe (documento A/422), modificada por la enmienda de la delegación de Dinamarca que acaba de ser aprobada. Esta resolución, en vista de la decisión tomada por la Asamblea, exige una mayoría de dos tercios.

Se procede a votación nominal, con el resultado siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Bolivia, Brasil, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Chile, China, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Etiopía, Francia, Guatemala, Haití, Islandia, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Arabia Saudita, Siam, Suecia, Siria, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia.

Votos en contra: Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, El Salvador, Grecia, Nicaragua, Turquía, Unión Sudafricana, Reino Unido.

Abstenciones: Costa Rica, República Dominicana, Nueva Zelanda, Paraguay.

Ausentes: Honduras, Yemen.

Por 41 votos contra 10 y 4 abstenciones queda aprobada la resolución con las enmiendas introducidas.

Se levanta la sesión a las 19.25 horas.

106a. SESION PLENARIA

*Celebrada en Flushing Meadow, Nueva York,
el sábado 1º de noviembre de 1947, a las 21 horas.*

Presidente: Sr. O. ARANHA (Brasil).

En ausencia del Sr. Aranha, el Sr. Belt (Cuba) ocupa la presidencia.

58. Acuerdos de administración fiduciaria relativos a los territorios no autónomos: informe de la Cuarta Comisión (documento A/423)

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): Tiene la palabra el representante de Haití, Relator de la Cuarta Comisión, quien va a presentar el informe de dicha Comisión.

Sr. DORSINVILLE (Haití) (*traducido del francés*): El cuarto informe de la Cuarta Comisión (documento A/423) se refiere a los acuerdos de administración fiduciaria que deben presentarse para los territorios no autónomos de conformidad con el inciso c del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta.

Después de largos debates dedicados más al concepto de la política que debe seguirse con respecto a estos territorios, a fin de asegurar su evolución, que al carácter facultativo de la disposición de la Carta, se aprobó un proyecto de resolución en el cual se expresó la esperanza de que los Miembros de las Naciones Unidas responsables de la administración de los territorios no autónomos propongan acuerdos de administración fiduciaria de conformidad con el inciso c del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta.

Esta resolución, que voy a leer, ha sido recomendada para que sea aprobada por la Asamblea General:

"Considerando que al crearse las Naciones Unidas se previó que los territorios no autónomos serían colocados voluntariamente bajo el régimen internacional de administración fiduciaria por los Estados administradores, y que esta intención fue inscrita en el inciso c del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta de las Naciones Unidas;

"Considerando que el régimen internacional de administración fiduciaria prevé, de conformidad con los principios elevados y los fines de la Carta, los medios más seguros y rápidos para que las poblaciones de los territorios no autónomos alcancen la autonomía o la independencia bajo la dirección colectiva y control de las Naciones Unidas;

"La Asamblea General espera que los Miembros de las Naciones Unidas que administran territorios no autónomos propongan acuerdos de administración fiduciaria en virtud del inciso c del párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta de las Naciones Unidas para todos o para algunos de estos territorios que no reúnen las condiciones para obtener inmediatamente la autonomía."

El PRESIDENTE (*traducido del inglés*): La delegación de Cuba ha propuesto, en el documento A/442, una enmienda a la resolución aprobada por la Comisión. Tiene la palabra el representante de Cuba.

Sr. MEYER (Cuba): Señor Presidente, señores representantes: La delegación de Cuba ha presentado la enmienda que se encuentra ante la consideración de Vds. a la resolución sobre acuerdos de administración fiduciaria para territorios no autónomos, propuesta por el honorable representante de la India en un espíritu de conciliación.

La enmienda que propongo suprimiría, de ser aprobada, las cinco primeras palabras de la tercera línea del párrafo segundo completo del proyecto de resolución, tal como aparece en el documento A/423, página 2 en el texto inglés, para insertar en su lugar *"a sure and quick means"*.

Mi delegación estima que, tal como aparece este "por cuanto" en la resolución original, señala que el régimen internacional de administración fiduciaria es el medio más seguro y rápido para asegurar el gobierno propio o la independencia de los pueblos de territorios no autónomos. Es éste un concepto que puede considerarse excluyente en la forma presentada, que equivale a desconocer que pueda existir otro medio tan seguro y rápido para que esos pueblos alcancen ese mismo fin.

La enmienda que propongo reconoce que el régimen internacional de administración fiduciaria es un medio seguro y rápido, pero no excluye otros medios ni desconoce sus posibles méritos.

La delegación de Cuba votará por esta resolución enmendada, porque entiende que en ella la Asamblea General expresa una esperanza de que aquellos países Miembros de las Naciones Unidas que llevan sobre sí el peso de una gran responsabilidad, como es la de asegurar el adelanto político, económico, social y educativo de los pueblos de los territorios no autónomos bajo su administra-